**GUÍA PARA EL LECTOR**

El texto a la mano tiene como fin servir como un modelo de demanda de amparo indirecto por violaciones a los derechos constitucionales, en específico aquellos vinculados con el derecho a la educación de cualquier persona. En el caso concreto, este amparo surgió posterior a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador publicara en su cuenta oficial de Twitter un vídeo en el que informó que había emitido un memorándum dirigido a las Secretarías de Gobernación, Educación y Hacienda para dejar de aplicar y suspender los efectos de la reforma constitucional en materia de educación de 2013, comúnmente conocida como la Reforma Educativa.

Así, esta demanda tuvo como fin: (a) declarar que el Memorándum es ilegal e inconstitucional y por lo tanto evitar que fuera acatado por parte de las Secretarías de Estado a las que se encuentra dirigido; y (b) reconocer el *interés* que tienen los padres de familia (en representación de sus hijos) para impugnar actos de esta naturaleza y generar precedentes relevantes.

Si bien el acto concreto del memorándum ha perdido relevancia para litigios actuales, este modelo de demanda de amparo sirve para que cualquier ciudadano pueda reclamar un acto arbitrario del presidente u otra autoridad que carezca de motivación y fundamentación y afecte su derecho a la educación

En el Consejo Nacional de Litigio Estratégico estamos convencidos de que la democratización de la justicia es uno de los pilares fundamentales de la sociedad civil y que empoderar al ciudadano y facilitar su acceso a la justicia son pasos esenciales para cumplir con esta meta.

**Quejoso:**

**[Nombre completo del Quejoso]**

**Juicio de amparo indirecto**

**Demanda de amparo.**

**JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN TURNO.**

**[Nombre completo del representante]**, en representación de los menores **[Nombre completo del Quejoso]**; ante Usted, con el debido respeto comparecemos para exponer:

**Contenido.**

[Términos definidos. 1](#_heading=h.1fob9te)

[Personalidad. 2](#_heading=h.3znysh7)

[Domicilio. 3](#_heading=h.2et92p0)

[Expediente electrónico. 3](#_heading=h.tyjcwt)

[Autorizaciones. 4](#_heading=h.3dy6vkm)

[Representante común. 4](#_heading=h.1t3h5sf)

[Demanda de amparo indirecto. 5](#_heading=h.4d34og8)

[Procedencia. 19](#_heading=h.3j2qqm3)

[Oportunidad. 20](#_heading=h.4i7ojhp)

[Interés legítimo. 21](#_heading=h.2xcytpi)

[Competencia y jurisdicción. 34](#_heading=h.3as4poj)

[Conceptos de violación. 35](#_heading=h.1pxezwc)

[Suplencia de la queja. 81](#_heading=h.3fwokq0)

[Pruebas. 82](#_heading=h.1v1yuxt)

[Datos personales. 83](#_heading=h.4f1mdlm)

[Petitorios. 84](#_heading=h.2u6wntf)

**Términos definidos.**

A efecto de simplificar la lectura de la presente demanda de amparo indirecto, a continuación, presentamos una tabla que resume los principales términos definidos y que se utilizan a lo largo de este escrito. Por tanto, los términos que aparezcan con mayúsculas o con mayúscula inicial tendrán el significado que a los mismos se atribuye, de acuerdo a lo siguiente:

| “**CJEF**" | : | Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. |
| --- | --- | --- |
| “**Constitución Federal**” y/o la “**Constitución**” | : | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. |
| “**INEE**” | : | Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. |
| “**Memorándum**” y/o el “**Memorándum Reclamado**” | : | Memorándum de fecha 16 de abril de 2019 firmado por el Presidente en el que se instruyó a diversas secretarías de la administración pública federal “*suspender*” la aplicación de la Reforma Educativa y que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. |
| “**Presidente**” | : | Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. |
| “**Quejosos**” y/o la parte “**Quejosa**” | : | [\*] |
| “**Reforma Educativa**” | : | Conjunto de cambios legislativos a los artículos 3, fracciones III, VII; VIII y IX; y 73 fracción XXV de la Constitución publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de febrero de 2013. |
| “**SEGOB**” | : | Secretaría de Gobernación. |
| “**SEP**” | : | Secretaría de Educación Pública. |
| “**SHCP**” | : | Secretaría de Hacienda y Crédito Público. |

**Personalidad.**

Los Quejosos en el presente juicio de amparo indirecto son estudiantes inscritos ante una institución educativa parte del Sistema Educativo Nacional, menores de edad y debidamente representados, tal y como se observa de la siguiente tabla:

| **Nombre del Quejoso** | **Clave Única de Registro de Población** | **Escolaridad y/o grado cursado** | **Nombre del representante del Quejoso** | **Anexo** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX | XXX | XXX | XXX | A.1 |
|  |  |  |  | A.2 |
|  |  |  |  | A.3 |
|  |  |  |  | A.4 |
|  |  |  |  | A.5 |

Para facilitar el estudio de la personalidad de esta parte Quejosa, exhibimos como **Anexo “A”** de este escrito inicial, una serie de documentos consistentes en: (a) el acta de nacimiento y datos de identificación de los Quejosos; (b) la escolaridad y calidad de estudiantes que tienen dichas personas, así como su relación íntima con el derecho fundamental a la educación –*entre otros*–; y (c) la representación por parte de las madres o padres de los Quejosos.

**Domicilio.**

Señalamos como domicilio de la parte Quejosa para oír y recibir todo tipo de notificaciones el de la “Fundación Barra Mexicana, A.C.” ubicado en la calle de Durango número 332, despacho 203, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06700, en esta Ciudad de México.

Cabe mencionar que este domicilio se señala con independencia y sin perjuicio de la solicitud de notificaciones electrónicas que consta en el siguiente capítulo del presente escrito, para el caso en que no sea posible notificar a esta parte Quejosa vía electrónica las notificaciones, resoluciones u otras constancias relacionadas con el presente juicio de garantías.

**Expediente electrónico.**

Con fundamento en los artículos 3 y 30 de la Ley de Amparo y los artículos 93, 94 y 96 de los lineamientos planteados en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, solicitamos a su Señoría autorización para consultar de manera electrónica el expediente del presente juicio de garantías a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a **XXX** con nombre de usuario **XXX**.[[1]](#footnote-0)

Adicionalmente, con fundamento en los artículos 30 y 31 de la Ley de Amparo y el artículo 97 de los lineamientos planteados en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, autorizamos expresamente a **XXX**, quien cuenta con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) para recibir todo tipo de notificaciones electrónicas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.[[2]](#footnote-1)

**Autorizaciones.**

La parte Quejosa autoriza en términos amplios y según lo previsto por el artículo 12 de la Ley de Amparo a las siguientes personas: XXX (cédula profesional XXX); XXX (cédula profesional XXX); y XXX (cédula profesional XXX). Destacamos que las cédulas profesionales de los autorizados en términos amplios se encuentran debidamente inscritas ante el sistema electrónico de los órganos del Poder Judicial de la Federación.

Igualmente y en términos de la última parte del artículo referido en el párrafo anterior, así como del artículo 24 de la citada Ley y sólo para el efecto de oír y recibir toda clase de notificaciones, documentos, valores, así como para imponerse de los autos, inclusive por medios electrónicos y digitales, los Quejosos autorizan indistintamente a: XXX

**Representante común.**

En este acto y con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, los Quejosos designan a **[\*]** para que asuma la representación común de dichas personas en el presente juicio de amparo indirecto y/o en cualquier otro juicio, procedimiento o recurso que derive de la presente *Litis*. En virtud de lo anterior, solicitamos de la manera más atenta que se tenga por designado a [\*] como representante común de la parte Quejosa, para todos y cada uno de los trámites y gestiones posteriores a la presentación de esta demanda, así como para todos los efectos legales a los que haya lugar.

**Demanda de amparo indirecto.**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 103, fracción I, 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, fracción I, 5, fracción I, 17, 107, 108 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, y los artículos 1°, fracción V y 42, 52 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, acudimos ante su Señoría a efecto de promover la presente **demanda de amparo indirecto** en contra de los actos y de las autoridades que a continuación se mencionan y a fin de que conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la ley citada se nos restituya en el goce de nuestras garantías.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 108 de la Ley de Amparo, bajo formal protesta de decir verdad manifestamos lo siguiente:

1. **Nombre y domicilio de los Quejosos.**

Las personas señaladas en el capítulo de “PERSONALIDAD” debidamente representadas por sus madres o padres, quienes designan como su representante común a [\*] y señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la “XXX.” ubicado en la calle de XXX

1. **Nombre y domicilio del Tercero Interesado.**

Esta parte Quejosa manifiesta bajo formal protesta de decir verdad que no existe parte Tercera Interesada en el presente juicio de amparo indirecto.

1. **Autoridades Responsables.**

Señalamos como Autoridades Responsables en el presente juicio de amparo a las siguientes personas y dependencias y/u organismos de la administración pública federal:

* 1. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador (el “**Presidente**”).[[3]](#footnote-2)
  2. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por conducto de su titular Julio Scherer Ibarra (la “**CJEF**”).
  3. La Secretaría de Gobernación, por conducto de su titular Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila (la “**SEGOB**”).
  4. La Secretaría de Educación Pública por conducto de su titular Esteban Moctezuma Barragán (la “**SEP**”).
  5. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de su titular Carlos Manuel Urzúa Macías (la “**SHCP**”).

1. **Actos Reclamados.**
   1. Actos reclamados del Presidente.

En primer lugar, reclamamos del Presidente, la emisión y firma del Memorándum de fecha 16 de abril de 2019, por virtud del cual se instruyó a tres Secretarías de Estado a “…*detener, dejar sin efecto las medidas que contempla la mal llamada reforma educativa* (*sic*.)…” (el “**Memorándum**” y/o el “**Memorándum Reclamado**”).[[4]](#footnote-3)

Todas y cada una de las consecuencias legales, directas, naturales y/o necesarias y/o que sean consecuencia directa o indirecta del Memorándum Reclamado y referido en el punto que antecede, entre éstas, de manera enunciativa más no limitativa la suspensión de cualquier efecto de las obligaciones a cargo del Estado, previstas por los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución Federal.

* 1. Actos reclamados del CJEF.

En segundo lugar, reclamamos del CJEF la emisión, realización, emisión y/o ratificación del Memorándum, así como todas y cada una de las consecuencias legales, directas, naturales y/o necesarias y/o que sean consecuencia directa o indirecta del Memorándum Reclamado, entre éstas, de manera enunciativa más no limitativa la suspensión de cualquier efecto de las obligaciones a cargo del Estado, previstas por los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución Federal.

* 1. Actos reclamados de la SEGOB.

Todas y cada una de las consecuencias legales, directas, naturales y/o necesarias y/o que sean consecuencia directa o indirecta del Memorándum Reclamado y referido en el punto que antecede, entre éstas, de manera enunciativa más no limitativa la suspensión de cualquier efecto de las obligaciones a cargo del Estado, previstas por los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución Federal.

* 1. Actos reclamados de la SEP.

Todas y cada una de las consecuencias legales, directas, naturales y/o necesarias y/o que sean consecuencia directa o indirecta del Memorándum Reclamado y referido en el punto que antecede, entre éstas, de manera enunciativa más no limitativa la suspensión de cualquier efecto de las obligaciones a cargo del Estado, previstas por los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución Federal.

* 1. Actos reclamados de la SHCP.

Todas y cada una de las consecuencias legales, directas, naturales y/o necesarias y/o que sean consecuencia directa o indirecta del Memorándum Reclamado y referido en el punto que antecede, entre éstas, de manera enunciativa más no limitativa la suspensión de cualquier efecto de las obligaciones a cargo del Estado, previstas por los artículos 3 y 73 de la Constitución Federal.

Destacamos que todos y cada uno de los actos reclamados en el presente juicio de amparo vulneran de manera directa e inmediata los derechos fundamentales de la parte Quejosa reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte.

1. **Fecha de conocimiento del Memorándum Reclamado.**

Bajo formal protesta de decir verdad, manifestamos que esta parte Quejosa tuvo conocimiento pleno del Memorándum Reclamado, el pasado 16 de abril de 2019, fecha en que el Presidente publicó en su cuenta oficial de Twitter el documento íntegro cuya expedición, contenido y actos de ejecución se reclaman a través de la presente demanda de amparo indirecto.[[5]](#footnote-4)

1. **Preceptos constitucionales, convencionales y legales violados.**

De conformidad con el artículo 1, fracción I de la Ley de Amparo vigente, esta parte Quejosa considera violados por el Memorándum Reclamado y sus subsecuentes e inminentes actos de ejecución los preceptos constitucionales, convencionales y legales descritos en los siguientes incisos.

* 1. Preceptos constitucionales y convencionales.

Los artículos 1, 3, 4, 14, 16, 29, 49, 73, 89, 133 y 135 , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la “**Constitución Federal**” o la “**Constitución**”) así como así como los artículos los artículos XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y 28 de la Convención sobre Derechos del Niño.

* 1. Leyes violadas.

Los artículos relativos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General, de la Ley General de Servicio Profesional Docente y demás disposiciones normativas de Tratados Internacionales u otros ordenamientos que se mencionan dentro de los conceptos de violación que se aducen dentro de la presente demanda de amparo indirecto.

1. **Antecedentes.**

Bajo formal protesta de decir verdad,a continuación manifestamos cuáles son los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y que sirven de fundamento a los conceptos de violación:

* 1. Quién es la parte Quejosa.

La parte Quejosa en la presente demanda de amparo indirecto es un grupo de estudiantes de educación básica y que forman parte del Sistema Educativo Nacional.[[6]](#footnote-5) Concretamente, los Quejosos –*y sus representantes*– forman parte del Sistema Educativo Nacional en términos del artículo 10(I) de la Ley General de Educación, mismo que en lo relevante se transcribe a continuación:

**Artículo 10**. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público.

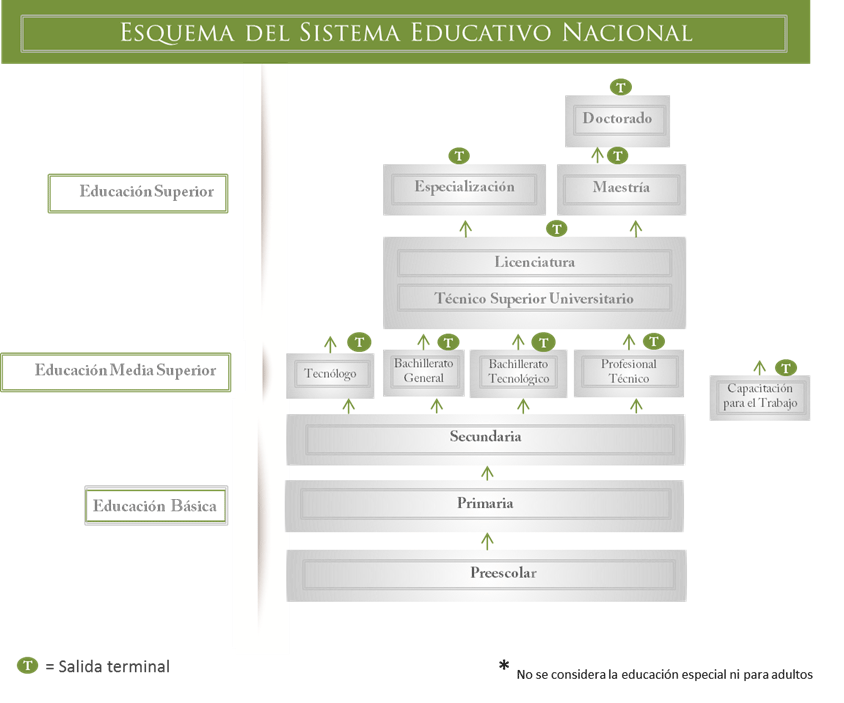
Constituyen el sistema educativo nacional:

I.- **Los educandos, educadores y los padres de familia**; (Fracción reformada DOF 11-09-2013)

[…]

Para mayor claridad, respecto de la calidad de estudiantes (educandos en términos de la Ley General citada en el párrafo anterior), en seguida nos permitimos insertar un esquema en el que se observa la integración y etapas del Sistema Educativo Nacional. El esquema, es el siguiente:

**Figura 1.** Esquema del Sistema Educativo Nacional.[[7]](#footnote-6)



Finalmente, con los documentos presentados como **Anexo “A”** de este escrito, se acredita la personalidad de los Quejosos; y particularmente la calidad de estudiantes e integrantes del Sistema Educativo Nacional.[[8]](#footnote-7)

* 1. La Reforma Educativa.

El día 26 de febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que modificó y adicionó diversas fracciones de los artículos 3 y 73 de la Constitución Federal, dichas modificaciones se conocieron popularmente como la Reforma Educativa.[[9]](#footnote-8)

Esencialmente, en seguida transcribimos el contenido de los puntos esenciales –*a nivel constitucional*– sobre los que versó la Reforma Educativa:

Artículo 3. ...

[…]

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

I. y II. ...

a) ...

b) Será nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos - atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y

d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos;

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;

IV. a VI. ...

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y

IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá:

a)    Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;

b)    Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y

c)    Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará compuesta por cinco integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa comparecencia de las personas propuestas, designará al integrante que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante de la Junta de Gobierno aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.

Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto y cumplir los requisitos que establezca la ley, desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. Los integrantes no podrán durar en su encargo más de catorce años. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título IV de esta Constitución y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del Instituto y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia.

La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien la presida, con voto mayoritario de tres de sus integrantes quien desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la ley.

La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, el cual regirá sus

actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión.

La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Instituto y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones.

**Artículo 73.** ...

I. a XXIV. ...

XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma;

XXVI. a XXX. ...

* 1. Implementación de la Reforma Educativa.

La Reforma Educativa se dividió en seis partes, la primera, sustantiva relativa al mejoramiento de la calidad de la educación y los lineamientos de aplicación; en segundo lugar se establecieron las reglas relativas al servicio docente profesional, así como las bases para su ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, a través de concursos de oposición y evaluación obligatoria. En tercer lugar, la Reforma Educativa delineo el régimen de las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía.

En cuarto lugar y derivado a que la materia educativa es una facultad concurrente entre estados, municipios y federación, se implementaron los mecanismos de coordinación necesarios para distribuir competencias en quinto lugar se estableció la estructura orgánica, donde se estableció la existencia de un órgano constitucional autónomo denominado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (“**INEE**”), su forma de integración y funcionamiento. Finalmente, la Reforma Educativa estableció un régimen transitorio, para su entrada en vigor, así como las obligaciones a diversos entes estatales para adecuar la normatividad existente a la implementada reforma educativa.[[10]](#footnote-9)

* 1. La derogación de la Reforma Educativa como promesa de campaña.

A lo largo del periodo electoral que culminó el 1 de julio de 2018, el Presidente –*como candidato presidencial en ese entonces*– prometió en eventos públicos y privados, debates y demás encuentros la abrogación de –*en sus palabras*– la mal llamada Reforma Educativa. Como consecuencia de lo anterior, el Proyecto de Nación 2018-2024 contempla un apartado específico denominado “*Educación para todos*” en el que se dispuso lo siguiente:[[11]](#footnote-10)

“[…]

**En el nuevo gobierno democrático (*sic*.) el sector educativo será prioritario**. La educación es un elemento indispensable para el desarrollo nacional: crea condiciones de equidad, fortalece el espíritu de los educandos, mejora la calidad de vida de las familias y la convivencia social, impulsa la economía y hace posible la democracia.

El recibir educación en todos los niveles es un derecho universal de todos los habitantes del país, sea cual sea su edad, condición social, cultural y económica. Garantizar este derecho es una responsabilidad del Estado. El artículo 3° constitucional establece esa obligación para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, pero también señala el deber del Estado de promover e impartir de manera gratuita todos los tipos y niveles educativos, incluyendo la educación superior.

En veinticinco años se han llevado a cabo reformas legales (en 1993, 2008 y 2012) y ajustes en los programas y planes de estudio que han profundizado la distancia entre una política que da prioridad a la inversión privada y establece controles en todos los niveles, y la realidad de un sistema educativo en situación de abandono y de franco deterioro. **La llamada reforma educativa impuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto afectó los derechos laborales de los docentes y creó una fractura en la gratuidad de la educación pública al atribuir a las familias la responsabilidad de administrar los planteles; año con año, el Legislativo y el Ejecutivo reducen el valor real de los presupuestos destinados a la educación y asignan recursos insuficientes para conseguir una infraestructura escolar decorosa y una planta de maestros con condiciones laborales y de enseñanza dignas; además, la situación de pobreza de amplios sectores de la población hacen prácticamente imposible el que los niños y jóvenes asistan a clases**.

[…]”[[12]](#footnote-11)

Por tanto, una vez ganadas las elecciones, el Presidente realizó diversos actos con la finalidad de dejar sin efectos la Reforma Educativa y sustituirla por una serie de cambios según lo expuesto en el Proyecto de Nación 2018-2024. Por tanto, once días después de haber asumido el cargo, el día 12 de diciembre de 2018, el Presidente en la conferencia de prensa matutina, firmó una iniciativa de reforma constitucional a los artículos relativos a la materia educativa y que dejarían sin efecto las medidas adoptadas por la Reforma Educativa.[[13]](#footnote-12)

Así, al momento de firmar la iniciativa de reforma constitucional, el Presidente mencionó “…*compromiso cumplido, maestras y maestros de México*…”.[[14]](#footnote-13) En los siguientes párrafos, nos permitimos transcribir las principales consideraciones que el Presidente y el titular de la SEP expusieron durante la conferencia matutina del 12 de diciembre de 2018, en la que se firmó dicha iniciativa de reforma:

“[…]

**Hoy, vamos a presentarles el plan general de educación, iniciando por la firma de la iniciativa de reforma para cancelar la mal llamada Reforma Educativa, abrogarla. Y sustituir el ordenamiento actual**, el marco jurídico actual, por uno nuevo, en el que se establece, en lo fundamental, el derecho a la educación.

[…]”[[15]](#footnote-14)

En la misma conferencia de prensa, el titular de la SEP explicó los principales rasgos de la nueva reforma en materia educativa por la cual se planea reestructuras y/o dejar sin efectos a la Reforma Educativa. Para mayor claridad, a continuación citamos en lo conducente las declaraciones del titular de la SEP en la conferencia de prensa:

“[…]

Muy buenos días, señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

**Durante su campaña, usted recogió el enorme anhelo que hay en el país por una educación con equidad y con calidad y, al mismo tiempo, recogió la frustración de que las expectativas sembradas con la Reforma Educativa no produjeron un incremento en el aprovechamiento escolar de las niñas, los niños, los jóvenes**. Y sí, en cambio, provocaron un estrés e injusticias muy importantes al magisterio nacional.

Fue, sin lugar a dudas, muy injusto que se haya culpado a los maestros como únicos responsables de los problemas de la educación pública.

[…]

Y, sin lugar a dudas, **un problema fundamental fue lo que usted acaba de comentar, de que se dio esa reforma como una decisión unilateral, sin la participación de la sociedad**. Y eso lo llevó a usted en la campaña a afirmar que nunca más habrá una reforma educativa sin la participación del magisterio.

[…]

El organismo contará con un consejo consultivo de la mayor representatividad, que de manera permanente apoyará al sector educativo; y con una visión de futuro realizará un programa indicativo del más largo aliento, como ocurre en la mayor parte de los países desarrollados, un programa a 30, 40 años, que permitirá darle continuidad a una política educativa de Estado. **Lo anterior conlleva a la cancelación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación**.

[…]”[[16]](#footnote-15)

Al ser cuestionado por diversos medios de comunicación, el titular de la SEP explicó lo siguiente en cuanto a la iniciativa de reforma constitucional firmada el 12 de diciembre:

“[…]

**No tenemos la cifra exacta de cuántas personas fueron despedidas por motivos relacionados con la Reforma Educativa**.

[…]

PREGUNTA: Gracias secretario. Antonio López, del diario La Razón.  
Oiga, entonces con esto podemos afirmar que estos, alrededor de mil maestros que fueron cesados por oponerse a la reforma, ¿se les va a devolver su trabajo? Esto, por una parte.

Por la otra, que nos amplíe un poco más la información sobre la cancelación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ¿se crea uno nuevo y éste va a ser el encargado de generar las nuevas pruebas que ya dijo usted?, ¿no serán punitivas, sino evaluativas?

Y finalmente, si bien con la firma de esta iniciativa se avanza un paso más en el cumplimiento que hicieron los maestros, saber cómo va avanzando este tema de los presos políticos.

Si nos puede, finalmente, el maestro Scherer hablar de los votos que se requieren, ¿se pueden alcanzar acuerdos en esta materia, cree que se alcance la mayoría? Gracias.

SECRETARIO ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN: Muy bien. La respuesta es afirmativa, con respecto a los maestros que tuvieron, que fueron cesados, con motivo de la reforma.

**En cuanto al centro para la revalorización del magisterio, la mejora continua de la educación, es un centro que va a tener funciones mucho más amplias de las que tiene el INEE, en el sentido de que se le va a pedir, no solamente lineamientos para evaluar y valorar al sistema educativo en su conjunto, sino también a las autoridades educativas, el desempeño en términos de insumo para realizar la capacitación posteriormente**.

[…]”[[17]](#footnote-16)

De lo anterior, se observa con toda claridad: (a) que la abrogación de la Reforma Educativa fue una promesa de campaña eje en las elecciones presidenciales del año pasado y que llevaron a la titularidad del ejecutivo al Presidente; y (b) el objetivo de las iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión esencialmente consiste en detener y/o dejar sin efectos la serie de medidas incluidas en la Reforma Educativa que fue previamente expuesta en este apartado de antecedentes.

Finalmente, consideramos fundamental destacar que, a la fecha de presentación de este escrito inicial, la iniciativa de reforma constitucional impulsada por el Presidente no ha sido aprobada por el Congreso de la Unión, por lo que ninguno de los cambios o modificaciones previstas en la misma y propuestas por el ejecutivo federal han sido implementadas. En consecuencia, todos y cada uno de los efectos, organismos, mecanismos de evaluación y cualquier otro previsto por la Reforma Educativo continúan siendo vigentes y parte integrante del ordenamiento constitucional.

Por último, el pasado 30 de abril de 2019

“Derecho a la educación

Durante el periodo neoliberal el sistema de educación pública fue devastado por los gobiernos oligárquicos; se pretendió acabar con la gratuidad de la educación superior, se sometió a las universidades públicas a un acoso presupuestal sin precedentes, los ciclos básico, medio y medio superior fueron vistos como oportunidades de negocio para venderle al gobierno insumos educativos inservibles y a precios inflados, se emprendió una ofensiva brutal en contra de las escuelas normales rurales y **en el sexenio pasado se operó una mal llamada reforma educativa que era en realidad una contrarreforma laboral, contraria a los derechos laborales del magisterio y orientada a crear las condiciones para la privatización generalizada de la enseñanza**.”[[18]](#footnote-17)

* 1. El Memorándum.

El pasado 16 de abril de 2019 el Presidente publicó en su cuenta oficial de Twitter (@lopezobrador\_) un video de casi dos minutos en el que mencionó que acababa de dictar y firmar el Memorándum dirigido a la SEGOB, la SEP y la SHCP para “…*detener, dejar sin efecto las medidas que contempla la mal llamada reforma educativa* (sic.)…”.[[19]](#footnote-18) El Presidente también reconoció que, paralelamente a la emisión del Memorándum, el Congreso de la Unión se encontraba en discusiones de varias iniciativas para reformar la Constitución en lo relativo al sector educativo.

A continuación insertamos una captura de pantalla del mensaje publicado por el Presidente el 16 de abril de 2019 y a partir del cual se dio a conocer el contenido del Memorándum combatido a través del presente juicio de garantías:

**Figura 2.** Captura de pantalla del mensaje del Presidente, a través del cual se dio a conocer la existencia del Memorándum Reclamado.



Así, en el mensaje publicado en la cuenta de Twitter del Presidente, también se incluyó un hipervínculo al sitio [https://lopezobrador.org.mx](https://lopezobrador.org.mx/)[[20]](#footnote-19) en el que se adjuntó una copia simple del Memorándum, mismo que presentamos como **Anexo “B”** de este escrito. Para mayor claridad, en seguida transcribimos el contenido íntegro del Memorándum:

“[…]

Ciudad de México, 16 de abril de 2019

MEMORÁNDUM

A la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero

Al Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán

Al Secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa Macías

Como es de público conocimiento, las reformas conocidas como estructurales y la agenda impuesta desde el extranjero durante el periodo neoliberal no han dejado más que pobreza, violencia, corrupción y malestar social. **Particularmente, la mal llamada reforma educativa no se ha traducido en una mejoría de la calidad de la enseñanza; en cambio, este conjunto de modificaciones legales, impuesto mediante actitudes autoritarias y recurriendo a campañas de descrédito en contra del magisterio nacional, ha causado una indeseable polarización en la sociedad**, así como una manifiesta erosión institucional.

Hasta la fecha no ha sido posible alcanzar un acuerdo entre el Legislativo y los distintos sectores del gremio magisterial para derogar la llamada reforma educativa y reemplazarla por un marco legal satisfactorio, útil y funcional; sin embargo, la administración pública federal requiere de lineamientos claros para seguir operando en el ámbito de la enseñanza pública.

Así pues, en tanto se alcanza un entendimiento con maestros y padres de familia sobre los cambios constitucionales requeridos y las leyes reglamentarias que deben ser modificadas o, en su caso, abrogadas, y con base en las facultades que me confiere el cargo que detento, me permito presentar a ustedes los siguientes lineamientos y directivas:

1. La educación pública debe ser obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos los niveles de escolaridad. La Secretaría de Educación Pública (SEP) se atendrá a estos principios en tanto se alcanza el consenso entre el Congreso de la Unión, los trabajadores de la educación y la sociedad.
2. **Mientras el proceso de diálogo no culmine en un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa**.
3. **La nómina del sector educativo quedará bajo control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público**, la cual impedirá prácticas patrimonialistas, "aviadores" y cualquier otra forma de corrupción. La SEP, por su parte, administrará las plazas magisteriales, evitará que se trafique con ellas y garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas. **Asimismo, la SEP reinstalará a los educadores que fueron cesados por la aplicación de las evaluaciones punitivas**.
4. **La Secretaría de Gobernación realizará las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad a la brevedad a maestros y luchadores sociales que todavía se encuentren en prisión por haberse opuesto a la susodicha reforma** o por haber participado en otras causas sociales justas, así como a retirar las imputaciones legales formuladas por instancias del gobierno federal para castigar activismos pacíficos en lo político, social, laboral, ambiental, agrario y de defensa del territorio. De igual modo, deberá indemnizar a familiares de quienes perdieron la vida por la política autoritaria que prevaleció en los gobiernos anteriores.

Finalmente, aprovecho la expedición del presente memorándum para formular un exhorto a los maestros de todas las tendencias y corrientes a mantener un diálogo permanente, a impedir la confrontación y a buscar una formulación legal que garantice el derecho del pueblo a la educación bajo el principio juarista de que "nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho".

Atentamente

(Firma ilegible)

Andrés Manuel López Obrador

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

[…]”[[21]](#footnote-20)

En tal virtud, nos permitimos *disentir* del criterio adoptado por el Presidente y en consecuencia, promover el presente juicio de amparo indirecto en contra del Memorándum y todos y cada uno de los actos y efectos que se desprendan del mismo. De esta suerte, en los siguientes capítulos, expondremos con mayor detenimiento los conceptos de violación que el Memorándum Reclamado le causa a los Quejosos y que necesariamente conllevarán a que su Señoría conceda el amparo y protección de Justicia de la Unión a esta parte Quejosa.

**Procedencia.**

Esta parte Quejosa considera respetuosamente que es procedente el presente juicio de amparo indirecto en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 103 de la Constitución, que establece lo siguiente:

**Artículo 103.** Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite

Por normas generales, **actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte**;

[…]

Asimismo, en términos del artículo 107, fracción II de la Ley de Amparo se establece textualmente lo siguiente:

**Artículo 107**. El amparo indirecto procede:

I. (…)

II. **Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo**;

(…)

Por lo tanto, la presente demanda de garantías es procedente toda vez que su objeto es impugnar la constitucionalidad y convencionalidad del Memorándum, así como de todos y cada uno de los efectos y actos de ejecución que se desprendan del mismo y que constituyen actos u omisiones por parte de una autoridad distinta de los tribunales judiciales o del trabajo, lo anterior tal y como se demostrará en los conceptos de violación que adelante se harán valer.

**Oportunidad.**

Esta demanda de amparo indirecto se presenta por la parte Quejosa en legales tiempo y forma de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente. Este artículo establece un plazo genérico para la promoción del juicio de amparo de quince días hábiles contados a partir de la emisión y/o conocimiento del acto reclamado.[[22]](#footnote-21)

Según se desprende de lo expuesto en el inciso de antecedentes de la presente demanda, el pasado 16 de abril de 2019, el Presidente emitió el Memorándum y lo informó a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.[[23]](#footnote-22) Destacamos, además, que los Quejosos tuvieron conocimiento de la emisión del Memorándum Reclamado el mismo día 16 de abril de 2019.[[24]](#footnote-23) De manera que la presentación de este escrito resulta del todo oportuna al haber sido exhibido dentro del plazo previsto por la ley para tal efecto, mismo que fenece el día 13 de mayo de 2019.[[25]](#footnote-24)

Para mayor claridad respecto del cómputo del plazo para la presentación de este escrito, nos permitimos presentar la siguiente tabla:

| **16 de abril de 2019** | **\*\* de mayo de 2019** | **13 de mayo 2019** |
| --- | --- | --- |
| *Emisión del Memorándum y fecha de conocimiento de los Actos Reclamados.* | *Fecha de presentación de la demanda de amparo.* | *Fecha límite para promover el juicio de amparo.* |

En conclusión, debe considerarse que esta demanda de amparo indirecto se presenta por la parte Quejosa oportunamente ante su Señoría dentro del plazo de quince días hábiles previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que se destaca para todos los efectos legales a los que haya lugar.

**Interés legítimo.**

En el presente apartado se acreditará que los Quejosos cuentan con interés legítimo para promover la presente demanda de amparo indirecto, tal y como se expone a continuación.

1. **Marco jurídico.**
   1. Concepto de interés legítimo.

Con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, la cual entró en vigor el 4 de octubre de mismo año, en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal se incorporó el interés legítimo que puede hacer valer la parte agraviada. El texto, en lo conducente, del artículo 107, fracción I, se lee como sigue:

**Artículo 107**. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

1. **El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo**, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

[…]

A diferencia del texto anterior, ya hay una connotación de quién tiene el carácter de parte agraviada y constitucionalmente se define como “*quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico*”.

Una de las finalidades de la reforma, fue ampliar las posibilidades de acudir al juicio de amparo y por ello se reconoció que también el titular de un interés legítimo puede promover un juicio de amparo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica.

Así, en la exposición de motivos se precisó que al introducir la figura del interés legítimo en el juicio de amparo se buscaban abrir nuevas posibilidades de impugnación y permitir que cualquier persona que resulte afectada por un acto de autoridad en la situación jurídica derivada del orden jurídico pudiera ocurrir al juicio de amparo.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que **la noción del interés legítimo abrió el abanico de posibilidades para acudir al juicio de amparo**, pues ya no es necesario que la parte quejosa acredite una afectación directa, o la necesidad de probar un daño individualizado para que se pueda beneficiar mediante la concesión del amparo. Sin que ello implique una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo que se le ocurra acuda al juicio de amparo. Dicho en otras palabras, el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o, si se quiere, mantuvo la prohibición de que tan solo con este tipo de interés pueda acudirse al juicio de amparo.[[26]](#footnote-25)

Al resolver el amparo en revisión 366/2012, la Primera Sala definió **el interés legítimo como aquél interés personal —individual o colectivo—, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante**, que puede traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Del anterior asunto derivó la tesis jurisprudencial:

**INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE**.[[27]](#footnote-26)

La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, **el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra**. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tesis de jurisprudencia 38/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diez de agosto de dos mil dieciséis.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de agosto de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

De la jurisprudencia citada, se desprenden las condiciones particulares del interés legítimo que son las siguientes:[[28]](#footnote-27)

* + 1. Es un interés personal —*individual o colectivo*—, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante.

Ello implica que lo importante es determinar el momento en que ese interés legítimo de un individuo o de un colectivo es apto para reclamar su tutela. El interés personal puede ser individual o colectivo dependiendo si atañe a un individuo o a una pluralidad de personas con un interés común.

Hay intereses individuales que pueden ser mediatos respecto de los intereses colectivos, en el sentido de que el disfrute de bienes aptos lo son sólo para ser gozados por uno o más individuos del grupo, pero no para todos; sin embargo, tal hecho no impide que puedan llegar a constituirse en medios para la satisfacción de verdaderos intereses colectivos.[[29]](#footnote-28)

Es decir, el interés colectivo se determina en función de la inclinación en su satisfacción de un grupo determinable de ciudadanos con características y aspiraciones comunes; es decir, no se identifica de manera subjetiva con la identificación del sujeto portador, **sino que existe una calificación objetiva del mismo en función de las finalidades específicas de un sector de la colectividad más o menos determinable**.[[30]](#footnote-29)

Por ello, si se logra la satisfacción o la lesión de los derechos o intereses de un miembro de la colectividad, en realidad implica a su vez la satisfacción o afectación de todo el colectivo.

Por otra parte, la condición de que dicho interés sea cualificado, actual, real y jurídicamente relevante implica que no cualquier interés es objeto de protección, sino aquél interés presente, existente, y que es objeto de protección jurídica, pues deviene en un derecho accionable para su tutela.

* + 1. El interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo.

Es decir, ese interés debe **estar respaldado por una facultad o potestad otorgada por el orden jurídico sin que ésta tenga la capacidad para imponerse coercitivamente a otro sujeto**; es decir no hay un “poder de exigencia imperativa”.

* + 1. La parte agraviada debe alegar una violación a los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica.

En primer lugar, el hecho de que la Constitución establezca que la parte agraviada debe alegar la violación a un derecho reconocido por la Constitución es acorde con el modelo general de control de regularidad constitucional y, en concreto, con la reforma Constitucional de seis de junio de dos mil once, mediante la cual, se precisó el objeto de protección del juicio de amparo, como medio protector de garantías individuales y derechos humanos, contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano.

De igual forma, la parte agraviada debe alegar una violación a un derecho reconocido por la Constitución de conformidad con la diversa reforma Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, mediante la cual se modificó, entre otros, la denominación del Capítulo Primero del Título Primero y el artículo 1°, primero y quinto párrafos.

Por otra parte, la afectación a la esfera jurídica, entendiendo por ello el menoscabo, perjuicio o agravio a la esfera jurídica del gobernado, la cual está formada por el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos, puede ser de dos formas: 1) de manera directa, o 2) en virtud de su especial situación frente al orden jurídico

La anterior distinción dependerá de la incidencia que tenga la afectación en la esfera jurídica. La afectación será directa cuando incida de manera inmediata en la esfera jurídica del gobernado y de manera mediata es porque la afectación deriva de la especial situación en que se encuentra frente a una norma.

Lo importante de esta afectación es que con la reforma a la Constitución se introdujo una distinción que genera una diferenciación relevante, pues con ella se modifica la posición de la parte agraviada en el sentido de que se permite al actor una mayor accesibilidad al juicio de amparo. En ese sentido, se conservó lo referente a la afectación de manera directa, que tradicionalmente se ha identificado con el interés jurídico **y se introdujo la diversa afectación que puede operar en virtud de la especial situación que frente al orden jurídico se encuentra el agraviado**.

* + 1. Se traduce en un beneficio jurídico si se le llegara conceder el amparo a la parte quejosa.

Toda vez que el acto de autoridad afecta la esfera jurídica del gobernado, de manera directa o indirecta, ante una eventual concesión del amparo se logra que una satisfacción o reparación.

Si bien al interés legítimo a diferencia del jurídico no corresponde una obligación correlativa de dar, hacer o no hacer exigible a otra persona –*pues no se identifica con un derecho subjetivo*– **sí comporta la facultad de exigir una reparación del ordenamiento jurídico o bien de los perjuicios antijurídicos que de esa actuación le deriven**[[31]](#footnote-30).

* 1. La protección al proyecto de vida.

A continuación, se hace alusión brevemente a los fundamentos de la protección al derecho a la vida, a la dignidad humana, que, en su conjunto, son el fundamento del derecho a un proyecto de vida, aspiración máxima de cualquier persona que se considera libre y autónoma.

* + 1. Constitución.

**Artículo 1**. **En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea** parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

**Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia**.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

**Queda prohibida** toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier **otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas**.

* + 1. Declaración Universal de los Derechos Humanos**.**

**Artículo 3.**

**Todo individuo tiene derecho a la vida**, **a la libertad** y a la seguridad de su persona.

[…]

**Artículo 22.**

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, **la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad**.

**Artículo 23.**

1**. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo**.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

**3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.**

* + 1. Convención Americana de Derechos Humanos.

**CAPÍTULO II DERECHOS CIVILES Y POLITICOS**

[…]

**Artículo 4. Derecho a la Vida**

**1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción**. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

[…]

**ARTÍCULO 5.- Derecho a la Integridad Personal**

**1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.**

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. **Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.**

**[…]**

**CAPITULO III**

**DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

**Artículo 26.  Desarrollo Progresivo**

**Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas,** sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

* + 1. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

[…]

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, **la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia** humana y de sus derechos iguales e inalienables,

**Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana**,

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales,

[…]

**Artículo 6**

1. **El derecho a la vida es inherente a la persona humana**. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

[…]

**Artículo 10**

**1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano**.

* + 1. Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

**Artículo 3** **Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales** y culturales enunciados en el presente Pacto.

**Artículo 6**

1. **Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho**.

Declaración de la OIT Relativa a Los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento.

Considerando que la creación de la OIT procedía de la convicción de que **la justicia social es esencial para garantizar una paz universal y permanente**;

[…]

Considerando que, **con el objeto de mantener el vínculo entre progreso social y crecimiento económico, la garantía de los principios y derechos fundamentales en el trabajo reviste una importancia y un significado especiales al asegurar a los propios interesados la posibilidad de reivindicar libremente y en igualdad de oportunidades una participación justa en las riquezas a cuya creación han contribuido, así como la de desarrollar plenamente su potencial humano**;

Considerando que **la OIT debería prestar especial atención a los problemas de personas con necesidades sociales especiales, en particular los desempleados** y los trabajadores migrantes, movilizar **y alentar los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales encaminados a la solución de sus problemas, y promover políticas eficaces destinadas a la creación de empleo**;

2. Declara que todos los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena **fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos fundamentales** que son objeto de esos convenios, es decir: a) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y d) la eliminación de la discriminación en materia empleo y ocupación…”

De los preceptos anteriores, se desprende no sólo la protección en lo individual del derecho a una vida digna y a la oportunidad de buscar los medios de subsistencia para dicho fin, sino que, de su interpretación conjunta, se obtiene la existencia de la protección al proyecto de vida que si bien no se encuentra expresamente previsto en la Constitución mexicana ni en los convenios internacionales de los que se es parte, éste derecho sí existe porque es derivación de los otros, es decir, se encuentra protegido de forma implícita a partir de los otros.

Lo anterior, toda vez que de una interpretación seria y armónica que se haga de todos ellos, se llega a la conclusión de que el proyecto de vida se encuentra protegido en México, del mismo modo que la Corte Suprema ha reconocido la protección al derecho a la vida.

Recordemos que las normas de derecho fundamental pueden dividirse en dos grupos. Las normas de derecho fundamental directamente estatuidas por la Constitución y las normas adscritas de derecho fundamental. Por regla general, basta hacer alusión al texto de la Constitución para construir una fundamentación iusfundamental correcta concerniente a las normas de derecho fundamental directamente estatuidas.[[32]](#footnote-31)

Es decir, no toda norma iusfundamental se encuentra estatuida directamente en la Constitución, pues existen normas de ese carácter que derivan de las normas fundamentales y que por ello también tienen la categoría de normas iusfundamentales, a condición de que implícitamente deriven de la Constitución

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el proyecto de vida “*atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas*”.[[33]](#footnote-32) Para verificar el menoscabo al proyecto de vida de las personas, es necesario evaluar “*si los hechos del caso ocasionaron una grave alteración al curso que habría seguido su vida, en caso de que no se le hubiera generado el daño…”*.[[34]](#footnote-33)

El proyecto de vida se asocia al concepto de **realización personal**, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. En rigor, las opciones son la expresión y la garantía de libertad. Difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación.

Esas opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial. Por lo tanto, su cancelación o menoscabo implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no puede ser ajeno a la observación de los altos tribunales encargados de la impartición de justicia. En tal virtud, es razonable afirmar, que los hechos violatorios de derechos, impiden u obstruyen seriamente la obtención del resultado previsto y esperado, y por ende, alteran en forma sustancial el desarrollo del individuo. En otros términos, **el daño al proyecto de vida, entendido como una expectativa razonable y accesible en el caso concreto**, implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o muy difícilmente reparable".[[35]](#footnote-34)

Se debe dejar en claro, **que el proyecto de vida no es algo que necesariamente sucederá, sino una situación probable** y no meramente posible, que se daría dentro del previsible desenvolvimiento del sujeto, **que resulta interrumpido y contrariado por hechos violatorios de sus derechos humanos**; los cuales, cambian drásticamente el curso de su vida, modifican los planes y proyectos que la persona formula a la luz de las condiciones en que se desenvuelve su existencia y de sus aptitudes para llevarlos a cabo con probabilidades de éxito.[[36]](#footnote-35)

Los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando el Estado mexicano no ha sido parte, son orientadores para todas las decisiones de los jueces mexicanos, siempre que sean más favorables a la persona de conformidad con el artículo 1 constitucional.

* + 1. Criterios jurídicos relevantes.[[37]](#footnote-36)

**Los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos** que derivan de sentencias en donde el Estado Mexicano no intervino como parte en el litigio **son orientadores para todas las decisiones de los jueces mexicanos, siempre que sean más favorables a la persona, de conformidad con el artículo 1o. constitucional**. De este modo, los jueces nacionales deben observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorable y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Esto no prejuzga la posibilidad de que sean los criterios internos los que se cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 1o., lo cual tendrá que valorarse caso por caso a fin de garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos.

Por último, no podemos dejar de destacar que otra forma de referirnos al derecho de un proyecto de vida, es el derecho a la libre personalidad cuyo fundamento es la dignidad humana, y que consiste precisamente en el derecho de todo individuo de elegir de forma libre y autónoma su vida. El reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser.

**DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE**.[[38]](#footnote-37)

De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, **acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera**. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente.

En virtud de lo antes expuesto y fundado, debe decirse que el proyecto de vida es un derecho de toda persona a determinar su vida entendida como la expectativa razonable y accesible al caso concreto, cuya protección deriva tanto de la Constitución, las convenciones internaciones de derechos humanos de donde México es parte y de los distintos precedentes resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los jueces mexicanos deben considerar a la hora de resolver sobre violaciones en este derecho para procurar una protección más amplia en términos de lo previsto en el artículo 1 constitucional.

1. **Caso concreto.**

El Memorándum y sus eventuales y/o inminentes actos de ejecución por parte de las dependencias a las que se encuentra dirigido, generan una afectación inmediata y directo en los derechos de los Quejosos, con motivo de la especial situación en que se encuentran frente al orden jurídico y en particular con el Derecho Humano a la Educación, tanto en su aspecto individual como en el colectivo, tal y como se demostrará en los conceptos de violación más adelante.[[39]](#footnote-38)

Especialmente, el Memorándum y su ejecución generan una afectación a los derechos de los Quejosos, derivado de la especial situación en que se encuentran frente al orden jurídico, tanto en su aspecto individual como colectivo (derechos difusos y colectivo *stricto sensu*).[[40]](#footnote-39) Asimismo, los Actos Reclamados implican (como se desarrolla a lo largo del presente apartado) la violación de sus derechos individuales, colectivos y difusos.

Los Quejosos constituyen un grupo de estudiantes de educación básica y que se encuentran actualmente estudiando los grados académicos detallados en el capítulo de “PERSONALIDAD” de este escrito. Los estudiantes Quejosos, por tanto, tienen un interés cualificado, actual, real, y jurídicamente relevante, para ser protegido por la justicia federal. En los siguientes sub-incisos demostraremos la manera en que se actualiza la existencia de interés legítimo por parte de los Quejosos para promover el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal, así como, 5, fracción I, párrafo tercero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo.

* 1. Existencia de un interés individual y colectivo cualificado, actual, real y jurídicamente relevante.

En primer lugar, los Quejosos acreditan la existencia de un interés individual, ya que el representante común ofreció como prueba las documentales consistentes en la última boleta de calificaciones o constancia de inscripción que acreditan lo siguiente: (a) los Quejosos se encuentran inscritos en una escuela incorporada de la SEP; y (b) los Quejosos son estudiantes en lo relativo al ciclo escolar 2018-2019 en los términos dispuestos por la SEP y en armonía con las normas que rigen el Sistema Educativo Nacional. Estas documentales forman parte del **Anexo “A”** de la presente demanda de amparo.[[41]](#footnote-40)

De dichas constancias, se acredita que cada uno de los Quejosos, hoy en día, es un estudiante, por lo que su interés es cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, pues está garantizado por un derecho objetivo.

* 1. Protección del interés por un derecho objetivo.

En segundo lugar, como acreditaremos en el capítulo de “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN”, el interés de la parte Quejosa –*derivado de la situación jurídica diferenciada*– se encuentra protegido por la Constitución, los Tratados Internacionales de los que México es parte y las Leyes (federales y generales) emitidas por el Congreso de la Unión. En síntesis, los intereses de la parte Quejosa se encuentran protegidos por el Derecho a la Educación, el Interés Superior del Menor y la garantía de Seguridad Jurídica e interdicción de la arbitrariedad, entre otros.

Con la finalidad de evitar ociosas repeticiones, solicitamos que el contenido íntegro de los conceptos de violación esbozados en ese escrito se tenga por reproducido en este inciso, como si a la letra se insertasen.

* 1. Violación a los derechos de la parte Quejosa.

En términos de la Constitución, los tratados internacionales y los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derecho Humanos, podemos sostener válidamente que el proyecto de vida de una persona se trata de la capacidad de elegir conducir su vida y alcanzar del destino que se propone. Es decir, otorgar un sentido a su decurso existencial, está en juego, nada menos que el futuro del ser humano, lo que libremente ha decidido hacer con su vida.

En nuestro caso, el hecho de que los Quejosos sean estudiantes actualmente, no representa únicamente el hecho de que éstos se encuentren en una situación jurídica diferenciada, sino que a través de la educación y de la educación de calidad, en particular, éstos podrán desarrollarse libremente dentro de un marco de legalidad. En otras palabras, la educación constituye el medio idóneo para desarrollar su proyecto de vida y que será distinto para cada persona integrante del Sistema Educativo Nacional.

El proyecto de vida representa la máxima aspiración del ser humano, la libertad de hacer con su vida lo que se quiere y desea dentro de sus posibilidades, habrá personas que con base en sus circunstancias específicas tengan una gama amplia de posibilidades de realización, habrá otras tantas, que sus posibilidades se reduzcan a una o dos opciones, no obstante, la protección del proyecto de vida, y el valor que representa para cada una de las personas, no se mide en el número de posibilidades con las que se cuente, cada posibilidad es igualmente valiosa y merece ser protegida.

El proyecto de vida de los Quejosos, se vio interrumpido y/o afectado directa e injustificadamente a raíz de la emisión del Memorándum y de cualquier acto de ejecución que la SEGOB, SEP y/o la SHCP hagan en cumplimiento de dicha orden por parte del Presidente. Con la finalidad de evitar ociosas repeticiones, solicitamos que el contenido íntegro de los conceptos de violación esbozados en ese escrito se tenga por reproducido en este inciso, como si a la letra se insertase.

* 1. Beneficio jurídico en caso de que se conceda el amparo.

Finalmente, ante una sentencia protectora, se generarían beneficios palpables en la esfera jurídica de los Quejosos, consistentes en que se continúen ejecutando, en lo aplicable, las medidas y efectos previstos en la Reforma Educativa y que hasta el momento de presentación de esta demanda de amparo indirecto, se encuentran contenidas en la Constitución Federal y las leyes que de ella emanan (como las Leyes Generales de Educación y del Servicio Profesional Docente), lo cual resulta en cumplir con el mandato constitucional, referente a que el Estado garantice la educación de calidad y la evaluación educativa, entre otras.

* 1. Conclusiones.

Siendo así, en el caso se cumple con todos los elementos constitutivos del interés legítimo, señalados en el anterior criterio, esto es: (a) un precepto constitucional violado, entre otros el derecho a la Educación consagrado en los artículos 3 y 4 de la Constitución Federal; (b) la transgresión por parte de las autoridades señaladas, consistente en la emisión del Memorándum, así como todos los actos posteriores de ejecución del mismo; y, (c) una colectividad de promoventes que son estudiantes de educación básica; y por lo tanto parte integrante del Sistema Educativo Nacional, quienes se verán afectados por los Actos Reclamados a las autoridades.

Derivado de lo anterior, resulta evidente que en el presente caso los Quejosos **sí** cuentan con interés legítimo para la interposición del presente juicio de amparo, pues los efectos jurídicos que provocarían una eventual sentencia favorable sí ocasionarían la obtención de un beneficio para los Quejosos, razón por la cual es esencial admitir a trámite la presente demanda; y en el momento procesal oportuno conceder a los Quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal.

**Competencia y jurisdicción.**

Este Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es constitucional y legalmente competente y tiene jurisdicción para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con los artículos 107, fracción VII de la 34 a la 86 de la Constitución; 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 33, 35, y 38 de la Ley de Amparo.

Adicionalmente, en virtud de que esta parte Quejosa tiene su domicilio dentro de la Ciudad de México, los Juzgados de Distrito adscritos a esta Circuito Judicial resultan ser competentes para conocer del presente juicio de amparo, conforme lo dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el Memorándum Reclamado fue emitido en la Ciudad de México y sus actos de aplicación tienen origen y aplicación dentro de esta Ciudad.[[42]](#footnote-41)

**Conceptos de violación.**

1. **El Memorándum es violatorio del derecho a la educación previsto por los artículos 3 y 4 de la Constitución, así como en los artículos XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y 28 de la Convención sobre Derechos del Niño.**
2. **El Derecho Humano a la educación.**

El derecho humano a la educación tiene sustento en dos preceptos de la Constitución, específicamente en sus artículos 3 y 4, que en la parte que interesan disponen:

**Artículo 3.** Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además:

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos - atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y

**d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos;**

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley;

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y

IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá:

a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;

b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y

c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará compuesta por cinco integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa comparecencia de las personas propuestas, designará al integrante que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante de la Junta de Gobierno aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.

Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto y cumplir los requisitos que establezca la ley, desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. Los integrantes no podrán durar en su encargo más de catorce años. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título IV de esta Constitución y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del Instituto y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia.

La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien la presida, con voto mayoritario de tres de sus integrantes quien desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la ley.

La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión.

La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Instituto y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones.

Artículo 4. […]

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

[…]

Por lo que hace a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, el derecho humano a la educación está reconocido, entre otros, en los siguientes:

1. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:

**Artículo XII.** **Toda persona tiene derecho a la educación**, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas.

**Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad**.

El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado.

Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos.

1. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

**Artículo 13**

1. Los Estados Partes en el presente Pacto **reconocen el derecho de toda persona a la educación**. Convienen en que **la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales**. Conviene, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

d) **Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria**;

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.”

1. Protocolo adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales, ( también conocido como “Protocolo De San Salvador"):

**Artículo 13**

Derecho a la educación

1. **Toda persona tiene derecho a la educación**.

2. **Los Estados Partes en el presente Protocolo convienen que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos**, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.

3. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación:

a. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;

b. La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

c. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

d. Se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;

e. Se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales.

4. Conforme con la legislación interna de los Estados Partes, los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella se adecue a los principios enunciados precedentemente.

5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados Partes.

1. Convención sobre los Derechos del Niño:

**Artículo 28**

1. **Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular**:

a) **Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos**;

b) **Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional**, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;

c) **Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad**, por cuantos medios sean apropiados;

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.

2. **Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar porque la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención**.

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.”

De lo anterior, se desprende que el derecho humano a la educación, por lo que hace a nuestro sistema jurídico, está reconocido tanto en la Constitución como en diversos instrumentos internacionales de los que México es parte.

Así, las normas citadas coinciden en lo esencial, entre otras cosas, en lo relativo a que la titularidad del derecho a la educación es de toda persona; a que su contenido, respecto de la educación básica, debe estar orientado a posibilitar la autonomía de sus titulares y a habilitarles como miembros de una sociedad democrática; a que la enseñanza básica (aunque difieren en cuanto a su alcance) debe ser asequible a todos sin discriminación, de manera obligatoria, universal y gratuita, y a que el Estado debe garantizarla; **a que la educación debe ser de calidad**; a que los padres tienen derecho a elegir la educación que se imparta a sus hijos y los particulares a impartirla, siempre y cuando respeten el contenido mínimo de ese derecho.

1. **Violación en el caso concreto**

Dicho lo anterior, es a todas luces claro y evidente que el Memorándum Reclamado vulnera el derecho a la educación de la parte quejosa y de los usuarios del sistema educativo general, tal y como se pasa a evidenciar a través de los siguientes argumentos lógico-jurídicos:

* 1. La Reforma Educativa.

Como se mencionó anteriormente, en el apartado “7.2” de los Antecedentes, el día 26 de febrero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “*DECRETO por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*”, comúnmente conocida como la “Reforma Educativa”.

Posteriormente, como consecuencia de la Reforma Educativa se publicaron diversas reformas a la Ley General de Educación y, se expidieron la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como la Ley General del Servicio Docente. Además, se creó el INEE como un órgano constitucional autónomo e independiente de la SEP.

En este sentido, lo establecido tanto por el Poder Constituyente Permanente, así como por el Legislador Federal ordinario, constituye el marco constitucional y legal que rige al día de hoy el sistema educativo nacional.

* 1. Pretensiones del Memorándum Reclamado.

Ahora bien,mediante la emisión del Memorándum reclamado, el Presidente d ordenó expresamente a las siguientes dependencias: (a) SEGOB; (b) SEP; y (c) SHCP dejar“sin efecto todas las medidas en la que se haya traducido la mal llamada reforma educativa…”.[[43]](#footnote-42)

Lo anterior, no hace más que evidenciar que mediante la emisión del Memorándum Reclamado en el presente juicio de derechos fundamentales, se haya dejado sin efecto la obligación del Estado de impartir educación de calidad (artículo 3, inciso d) del párrafo segundo de la fracción II de la Constitución), deje de operar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (fracción IX del artículo ° constitucional), se haya suspendido la obligación del Poder Ejecutivo Federal de crear planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República y deje de operar el sistema de evaluación de los profesores o maestros del sistema educativo nacional (fracciones III, VII, VIII y IX del artículo 3 de la Constitución Federal).

Dicho en otras palabras, **la emisión del Memorándum Reclamado vulnera el derecho a la educación de los niños, jóvenes y adultos en México, en tanto que mediante el acto reclamado se pretende “frenar” o dejar sin efecto, la reforma constitucional y legal en materia educativa**; no obstante que, como se verá más adelante, el Presidente de la Republica carece de facultades para actuar de esa manera y, en su caso, existen mecanismos legales y constitucionales para modificar, reformar, derogar o abrogar normas legales y constitucionales.

En mérito de lo antes expuesto, y toda vez que el acto reclamado vulnera el derecho a la educación de los niños, jóvenes y adultos que estudian en México, resulta válido y procedente que su Señoría conceda a la quejosa el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión que por esta vía solicita.

1. **El Memorándum es inconstitucional e inconvencional ante la falta absoluta de fundamentación y motivación por parte del Presidente.**
2. **El derecho fundamental a la fundamentación y motivación.**

El primer párrafo del artículo 16 constitucional establece que: *“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”*.

Resulta de explorado derecho que la fundamentación y la motivación consisten en los señalamientos que la autoridad pública debe hacer a los gobernados cuando se les invada o perturbe en sus esferas jurídicas, precisándoles los preceptos que le son aplicables en su contra e informándoles las causas o razones que se tuvieron en cuenta para proceder en su perjuicio, todo ello vinculando unos y otras mediante un razonamiento lógico-jurídico.

Si los órganos del Estado no lo hacen de la forma antes señalada, transgreden en perjuicio de los gobernados las garantías antes invocadas, lo que acarrea, por un lado, que ellos desconozcan los elementos considerados para emitir la resolución que los afecta y, por el otro, consecuencia derivada de lo anterior, que se vean imposibilitados para dirigir convenientemente la defensa de sus intereses.

A este respecto, la Suprema Corte de Justicia d la Nación, ha sustentado la siguiente Jurisprudencia:

**FUNDAMENTACION Y MOTIVACION**.**[[44]](#footnote-43)**

**De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, que también deban señalarse con precisión las circunstancias especiales**, razones particulares y causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

Asimismo, es ilustrativa la siguiente tesis de jurisprudencia, que a la letra dice:

**FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.[[45]](#footnote-44)**

De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.

Sígase de lo dicho, que el incumplimiento a lo ordenado por los artículos en comento se puede dar de dos formas, a saber:

1. Que en el acto de autoridad exista una *indebida* fundamentación y motivación; o bien,
2. Que se dé una *falta* de fundamentación y motivación del acto.

La indebida fundamentación implica que en el acto sí se citan preceptos legales, pero éstos son inaplicables al caso particular; por su parte, la indebida motivación consiste en que en el acto de autoridad sí se expresan las razones que sustentaron su emisión, pero éstas no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto.

En cambio, la falta absoluta de fundamentación consiste en la omisión de citar en el acto de molestia o de privación, el o los preceptos legales que lo justifiquen; por su parte, la falta absoluta de motivación consiste en la carencia total de expresión de razonamientos.

Sobre el tema, nuestro Poder Judicial de la Federación emitió la siguiente jurisprudencia:

**FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA.**[[46]](#footnote-45)

Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste.

Expuesto lo anterior, resulta claro y evidente que el Memorándum reclamado vulnera los principios de debida fundamentación y motivación, tal y como se pasa a evidenciar a través de los siguientes argumentos lógico-jurídicos.

1. **Violación en el caso concreto.**
   1. Contenido del Memorándum Reclamado.

Se afirma categóricamente lo anterior, pues en términos del Memorándum reclamado, la autoridad responsable señaló expresamente lo siguiente:

“Así pues, en tanto se alcanza un entendimiento con maestros y padres de familia sobre los cambios constitucionales requeridos y las leyes reglamentarias que deben ser modificadas o, en su caso, abrogadas, y con base en las facultades que me confiere el cargo que detento, me permito presentar a ustedes los siguientes lineamientos y directivas:”[[47]](#footnote-46)

En este sentido, es evidente que si bien la autoridad responsable expresamente señala que cuenta con facultades para emitir el acto reclamado, omite de manera absoluta citar los preceptos constitucionales o legales que le conceden las facultades y/o competencia para emitir el Memorándum reclamado.

Lo anterior, tiene como consecuencia, tal y como lo ha resuelto nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de jurisprudencia obligatoria[[48]](#footnote-47), que la parte quejosa se encuentre en un estado absoluto de indefensión ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad responsable para emitir el Memorándum reclamado, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo.

Asimismo, la inconstitucionalidad de omitir citar los preceptos que facultan a la autoridad responsable para emitir el Memorándum reclamado, tiene como consecuencia que el mismo no puede producir efecto alguno en contra de los quejosos.

* 1. Inexistencia de fundamentación del Memorándum Reclamado.

De igual forma, el Memorándum reclamado es inconstitucional, puesto que la autoridad responsable omitió citar los preceptos constitucionales o legales, que lo facultan para ordenar que:

1. Mientras el proceso de dialogo no culmine en un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejen sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada ejecutiva; es decir, la autoridad responsable jamás cita los preceptos que la facultan para ordenar a las instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejar de aplicar las medidas establecidas en la Constitución Federal y en las Leyes Reglamentarias en relación a la llamada reforma educativa;
2. Tampoco cita la autoridad responsable los preceptos constitucionales o legales que le otorgan competencia para ordenar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quedar al control de la nómina del sector educativo;
3. La autoridad responsable no cita los preceptos que la facultan para ordenar a la SEP, administrar las plazas magisteriales y garantizar la contratación de maestros egresados de las normales públicas;
4. De igual forma es omisa la responsable en señalar los preceptos que la facultan para ordenar a la SEP a reinstalar a los educadores que fueron cesados por la aplicación de las evaluaciones punitivas, ni mucho menos establece los motivos, razones o circunstancias, por las que considera que dichos educadores no obstante haber sido cesados por no superar las evaluaciones deben ser reinstalados;
5. No cita los preceptos conforme a los cuales tiene competencia para instruir a la SEGOB a que realice las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad a maestros y luchadores que se opusieron a la susodicha reforma y retirar las imputaciones legales formuladas por el gobierno federal; y
6. Por último, tampoco cita los preceptos que le permiten al Poder Ejecutivo dejar de aplicar e implementar la Ley y la Constitución Federal.
   1. Inexistencia de motivación del Memorándum Reclamado.

Asimismo, el Memorándum carece de toda motivación pues de ninguna manera señala de manera clara y precisa cuales son las medidas “…*en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa…*” que quedarán sin efecto, ni los motivos, razones o circunstancias por las que cada una de dichas medidas dejarán de ser aplicadas.

Luego entonces, y toda vez que ha quedado acreditado que el acto reclamado es inconstitucional por carecer de fundamentación y motivación, resulta válido y procedente que su Señoría conceda a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

1. **El Memorándum es violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución, en relación con los artículos 49, 72 y 89 constitucionales, así como del artículo 3 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.**

En este sentido, para una mayor comprensión se realiza una transcripción de la parte conducente de los artículos 89 y 3, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo:

**Artículo 89.** Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;

Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones entrarán en funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su encargo.

En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo Secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la República;

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica;

IV.     Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales;

V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las leyes.

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la fracción IV del artículo 76.

VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión.

IX. Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo, en términos de lo dispuesto en el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución;

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI.     Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión Permanente.

XII.    Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones.

XIII.   Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su ubicación.

XIV.   Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común, en el Distrito Federal;

XV.    Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

XVI.   Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la República podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV y IX, con aprobación de la Comisión Permanente;

XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.

El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición.

XVIII. Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado;

XIX.   Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley;

XX.    Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.”

**Artículo 3.** Son elementos y requisitos del acto administrativo:

I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo;

[…]

La violación constitucional se debe a que de la interpretación conjunta y armónica de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, se advierte que los actos administrativos precisan, para ser legales, entre otros requisitos, que sean emitidos por Autoridad competente cumpliéndose las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa **que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado**, expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues de lo contrario se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo.

En este sentido, las garantías de legalidad y seguridad jurídica tienen el alcance de exigir que todo acto de autoridad, **deba emitirse por quien tenga facultad expresa para ello**, señalando en el propio acto, como formalidad esencial que le dé eficacia jurídica, el o los dispositivos que legitimen la competencia de quien lo emita y el carácter con que este último actúe, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la dependencia correspondiente o por delegación de facultades.

En este orden de ideas, aunado a que en el Memorándum Reclamado no se emplea un solo artículo o legislación que fundamente el acto de autoridad, tampoco existe normatividad que faculte al Presidente para emitir un acto de esta índole, pues dentro de las facultades que expresamente le concede el artículo 89 de la Constitución Federal, no existe alguna que lo faculte para reformar o derogar la legislación vigente.

Lo anterior resulta cierto, pues de conformidad con el artículo 72 de la Constitución, la facultad para reformar o derogar leyes o decretos corresponde únicamente al Congreso de la Unión y no al Presidente, ya que, se deben atender los mismos procedimientos establecidos para la formación normativa, tal y como se puede apreciar de la parte conducente del artículo mencionado, que a continuación se transcribe:

**Artículo 72.** Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:

[…]

F. En la interpretación, reforma o **derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación**.

[…]

En este orden de ideas, es evidente que no se puede dejar sin efectos o modificar una norma vigente sin la intervención del Congreso de la Unión, ya que, resultaría contrario a derecho suspender un acto del Legislativo a través de un acto del Presidente pues no se estaría respetando el principio de división y separación de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución, que señala lo siguiente:

**Artículo 49.** El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Así las cosas, de la transcripción recién realizada del artículo 49, se puede apreciar que el Poder de la Federación debe encontrarse dividido en un Poder Legislativo, uno Ejecutivo y uno Judicial y que no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona, por lo cual el titular del Ejecutivo no puede revestirse de las facultades que son competencia del Legislativo o del Judicial, ya que de lo contrario se estaría violentando lo previsto en el artículo constitucional apenas citado, razón por la cual se hace evidente lo ilegal y excesivo del acto de autoridad que nos ocupa, pues como ya se acreditó previamente (i) carece de fundamentación y motivación alguna, y (ii) el Presidente no goza de facultades para emitirlo.

Asimismo, no pasa desapercibido que si bien es cierto que existen criterios jurisprudenciales que señalan que la división de Poderes establecida en nuestra Constitución goza de cierta flexibilidad puesto que no constituye una separación absoluta y determinante, también lo es que dicha flexibilidad sólo significa que entre los Poderes de la Federación debe existir cierta colaboración y coordinación sin que ello se traduzca en que alguno de ellos pueda arrogarse facultades que le correspondan a otro, sino solamente aquellos que la propia Constitución les asigne; en este sentido, robustece lo anterior la siguiente tesis de jurisprudencia:

**DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA ARROGARSE FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLOS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES ASIGNA**.**[[49]](#footnote-48)**

El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en un solo individuo o corporación. Sin embargo, ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte que la división funcional de atribuciones que establece dicho numeral no opera de manera rígida, sino flexible, ya que el reparto de funciones encomendadas a cada uno de los poderes no constituye una separación absoluta y determinante, sino por el contrario, entre ellos se debe presentar una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado. **Como se advierte, en nuestro país la división funcional de atribuciones no opera de manera tajante y rígida identificada con los órganos que las ejercen, sino que se estructura con la finalidad de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas, mediante un régimen de cooperación y coordinación que funcionan como medios de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público, garantizando así la unidad del Estado y asegurando el establecimiento y la preservación del estado de derecho**. Por su parte, el artículo 133 de la Constitución Federal consagra el principio de supremacía, que impone su jerarquía normativa a la que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que, el hecho de que la división de poderes opere de manera flexible sólo significa que entre ellos existe una colaboración y coordinación en los términos establecidos, pero no los faculta para arrogarse facultades que corresponden a otro poder, sino solamente aquellos que la propia Constitución les asigna. De este modo, para que un órgano ejerza ciertas funciones es necesario que expresamente así lo disponga la Constitución Federal o que la función respectiva resulte estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas por efectos de la propia Constitución, así como que la función se ejerza en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva la facultad propia.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, y toda vez que ha quedado acreditado que el Memorándum Reclamado es inconstitucional, resulta válido y procedente que se conceda a la parte Quejosa el amparo y protección que de la Justicia de la Unión por esta vía se solicita.

1. **El Memorándum Reclamado es inconstitucional puesto que contraviene el derecho fundamental a la Seguridad Jurídica de la parte Quejosa y de los usuarios del Sistema Educativo Nacional.**

Para efectos de claridad en el desarrollo del presente concepto el mismo se dividirá en dos apartados. En el **primero,** se desarrollarla el derecho fundamental a la seguridad jurídica, así como los principios de interdicción a la arbitrariedad o prohibición del exceso y de confianza legítima; mientras que en el **segundo**, se acreditará la inconstitucionalidad del Memorándum reclamado por contravenir el derecho fundamental de seguridad jurídica.

1. **El Derecho Fundamental a la Seguridad Jurídica.**
   1. Alcances del Derecho Fundamental a la Seguridad Jurídica.

El segundo párrafo del artículo 14 constitucional textualmente establece lo siguiente:

**Artículo 14.** […] Nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

[…]

Por su parte, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, como ya se vio, instituye que nadie “*puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento*”.

Resulta de explorado derecho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido en diversos precedentes que el principio de legalidad y seguridad jurídica garantizados en su expresión genérica en los artículos 14 y 16 constitucionales, es respetado cuando las disposiciones de observancia general generan, por una parte certidumbre a los gobernados sobre las consecuencias jurídicas de sus conductas y, por otra, tratándose de las normas que confieran alguna facultad a una autoridad, acotan en la medida necesaria y razonable tal atribución, en forma tal **que se impida a dicha autoridad actuar de manera arbitraria o caprichosa en atención a las normas a las que debe sujetarse al ejercer dicha potestad.**

Sustenta lo anterior, en la parte respectiva, la tesis número CLXXIX/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro, texto y datos de localización, son los siguientes:

**RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. AL ESTABLECER LA LEY FEDERAL RELATIVA EN SUS ARTÍCULOS 47, 53, FRACCIÓN IV, Y 54, EL MARCO LEGAL AL QUE DEBE SUJETARSE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA EJERCER EL ARBITRIO SANCIONADOR IMPOSITIVO, RESPETA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA**.[[50]](#footnote-49)

**La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos precedentes, que los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en su expresión genérica en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son respetados por las autoridades legislativas cuando las disposiciones de observancia general que crean, por una parte, generan certidumbre en los gobernados sobre las consecuencias jurídicas de su conducta y, por otra, tratándose de normas que confieren alguna facultad a una autoridad, acotan en la medida necesaria y razonable esa atribución, en forma tal que se impida a la respectiva autoridad actuar de manera arbitraria o caprichosa en atención a las normas a las que debe sujetarse al ejercer dicha potestad**. En ese contexto, es inconcuso que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en sus artículos 47, 53, fracción IV y 54, respeta los referidos principios constitucionales, al fijar el marco legal al que debe sujetarse la autoridad administrativa para ejercer el arbitrio sancionador impositivo, toda vez que el legislador precisó, con el grado de certeza y concreción constitucionalmente exigible, el núcleo básico de las conductas calificadas como infractoras y las sanciones que les corresponden, en términos de lo previsto en sus artículos 47 y 53, además de que en el diverso numeral 54 encausó la actuación de la autoridad administrativa para imponer las sanciones relativas en el ámbito de su competencia, al limitar su atribución mediante la fijación de elementos objetivos a los que debe ajustarse para decidir el tipo de sanción que corresponde a la infracción cometida en cada caso concreto. Por tanto, del contenido de tales disposiciones se advierte que el servidor público no queda en estado de incertidumbre sobre las consecuencias jurídicas de su conducta, pues los principios rectores que la rigen, consistentes en la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, establecidos en la reforma constitucional a los artículos 109 y 113, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, se encuentran reglamentados y específicamente determinados, a través de un estructurado sistema disciplinario contenido en el indicado precepto 47, cuyo incumplimiento provoca la iniciación del procedimiento respectivo, el que en su caso concluye con la aplicación de sanciones predeterminadas, entre las que se encuentra la destitución a que se contrae la fracción IV del referido artículo 53. Lo anterior pone de relieve, que la facultad conferida a la autoridad sancionadora no puede ser producto de una actuación caprichosa o arbitraria, sino justificada por la evaluación de todas las circunstancias que rodean la situación de hecho advertida por la autoridad y que se concretizan mediante los elementos de convicción aportados en el curso del procedimiento respectivo, en el que el servidor público tiene oportunidad de rendir las pruebas que estime pertinentes, en concordancia con las normas que regulan el ejercicio de esa facultad sancionadora, pues de acuerdo con el margen legislativamente impuesto a la autoridad, su actuación tendrá que ser el resultado de la ponderación objetiva de los elementos relativos a la gravedad de la infracción, monto del daño causado y demás circunstancias que previene el citado artículo 54 para acotar su actuación y así permitir la fijación de una sanción acorde con la infracción cometida, especificada como tal en la propia ley.

Asimismo, es aplicable la siguiente tesis emitida también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

**DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. SU CONTRAVENCIÓN NO PUEDE DERIVAR DE LA DISTINTA REGULACIÓN DE DOS SUPUESTOS JURÍDICOS ESENCIALMENTE DIFERENTES**.[[51]](#footnote-50)

**La Suprema Corte de Justicia ha determinado que los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan por el legislador cuando las normas que facultan a las autoridades para actuar en determinado sentido, encauzan el ámbito de esa actuación a fin de que, por un lado, el gobernado conozca cuál será la consecuencia jurídica de los actos que realice, y por otro, que el actuar de la respectiva autoridad se encuentre limitado y acotado, de tal manera que la posible afectación a la esfera jurídica de los gobernados no resulte caprichosa o arbitraria**. Por tanto, tratándose de normas generales, la contravención a los precitados derechos no puede derivar de la distinta regulación de dos supuestos jurídicos esencialmente diferentes, sino en todo caso, de la ausente o deficiente regulación del supuesto normativo que es materia de impugnación.

* 1. El principio de interdicción a la arbitrariedad o prohibición del exceso.

En estrecha relación con la garantía de seguridad jurídica, se encuentra el principio de interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso mismo que, en palabras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en hacer mesurable la actuación pública buscando que cada medida que se adopte en el ejercicio del poder estatal sea una medida equilibrada y razonable, libre de todo capricho o abuso.

Así, dicho principio impone la justicia en la medición de los medios que se dispongan en relación con un fin determinado, una “*adaptabilidad*” que transforme el efecto de la actividad impositiva pública objeto de esa actividad. Se trata pues de una regla de equilibrio de la acción impositiva del Estado que se dirige a un objeto determinado, es decir, vincula la medida de comparación a un objeto justificador de la imposición, que sea colectivamente relevante, valorando las consecuencias de la imposición según sus efectos, atendiendo al objeto de la misma.[[52]](#footnote-51)

* 1. Del principio de confianza legítima como una manifestación del derecho a la seguridad jurídica.

El principio de confianza legítima consiste en una manifestación del derecho a la seguridad jurídica, en su faceta de interdicción o prohibición de la arbitrariedad o del exceso, en virtud del cual, en el caso de que la actuación de los poderes públicos haya creado en una persona interesada confianza  la estabilidad de sus actos, éstos no pueden modificarse de forma imprevisible e intempestiva.

Al respecto es aplicable el siguiente criterio emitido por la Segunda Sala del Alto Tribunal:

**CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD**.[[53]](#footnote-52)

**El derecho a la seguridad jurídica, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela la prerrogativa del gobernado a no encontrarse jamás en una situación de incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en un estado de indefensión**; su esencia versa sobre la premisa consistente en "saber a qué atenerse" respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad. Sin embargo, no debe entenderse en el sentido de que el orden jurídico ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el correlativo derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades. De lo anterior, **puede considerarse la confianza legítima como una manifestación del derecho a la seguridad jurídica, en su faceta de interdicción o prohibición de la arbitrariedad o del exceso, en virtud de la cual, en el caso de que la actuación de los poderes públicos haya creado en una persona interesada confianza en la estabilidad de sus actos, éstos no pueden modificarse de forma imprevisible e intempestiva**, salvo el supuesto en que así lo exija el interés público. Al respecto, cabe precisar que, atendiendo a las características de todo Estado democrático, la confianza legítima adquiere diversos matices dependiendo de si se pretende invocar frente a actos administrativos o actos legislativos.

Ahora bien, al tratarse el Memorándum Reclamado de un acto autoridad, el principio de confianza legítima debe entenderse precisamente como esa expectativa razonablemente creada en favor del gobernado, en relación con la actuación de las autoridades en el sentido de que las normas establecidas en la Constitución Federal y las Leyes Reglamentarias en materia educativa **deben acatarse y no pueden ser modificadas de forma imprevisible e intempestiva mediante simples órdenes presidenciales que no cumplen con los procedimientos constitucionales y legales exigidos para dejar sin efectos o modificar una Ley o la Constitución Federal.**

Una vez expuesto lo anterior, a continuación se acreditará que el Memorándum reclamado es inconstitucional, pues contraviene el derecho fundamental a la seguridad jurídica de la quejosa.

1. **Violación en el caso concreto.**
   1. La Reforma Educativa.

Como se mencionó anteriormente, en el apartado “7.2” de los Antecedentes, el día 26 de febrero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “*DECRETO por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*”, comúnmente conocida como la “Reforma Educativa”.

Posteriormente, como consecuencia de la Reforma Educativa se publicaron diversas reformas a la Ley General de Educación y, se expidieron la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como la Ley General del Servicio Docente. Además, se creó el INEE como un órgano constitucional autónomo e independiente de la SEP.

En este sentido, lo establecido tanto por el Poder Constituyente Permanente, así como por el Legislador Federal ordinario, constituye el marco constitucional y legal que rige al día de hoy el sistema educativo nacional.

* 1. Pretensiones del Memorándum Reclamado.

No obstante lo anterior, a través del Memorándum reclamado el Ejecutivo Federal, ordena que se dejen sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la reforma educativa, lo cual es inconstitucional pues viola el derecho fundamental a la seguridad jurídica de la quejosa.

Se afirma lo anterior, en tanto que es a todas luces violatorio del derecho de seguridad jurídica que se ordene que se dejen de observar normas generales en materia educativa mediante una simple orden presidencial, pasando por alto que las normas legales y constitucionales que rigen la educación en nuestro país dotan de certidumbre a la parte quejosa y a la población en general sobre el correcto funcionamiento del sistema educativo en México y el derecho a la educación de todos los mexicanos.

Igualmente, el Memorándum Reclamado deja en total estado de inseguridad jurídica e indefensión a la parte quejosa y a la población en general, pues en el mismo de ninguna manera se analiza ni se realiza pronunciamiento alguno sobre el cómo es que los lineamientos y directrices ordenadas se traducirán en un beneficio hacia los alumnos y cómo se garantiza y protege el derecho fundamental a la educación de los alumnos, por el contrario el acto reclamado únicamente versa y profundiza sobre los derechos laborales y económicos de los maestros, más no de los alumnos ni usuarios del sistema educativo mexicano.

Dicho en otras palabras, con el Memorándum reclamado la autoridad responsable de manera arbitraria y caprichosa, y alegando simplemente que a “la fecha no ha sido posible alcanzar un acuerdo entre el Legislativo y los distintos sectores del gremio magisterial para derogar la llamada reforma educativa y remplazarla por un marco legal satisfactorio…”, ordena se dejen de observar normas generales de rango constitucional y legal, sin que se desprenda de ninguna manera que dichas ordenes tengan por objeto proteger el interés superior de los menores y su derecho humano a la educación o el derecho a la educación de la población en general, lo cual se traduce en una franca violación a la seguridad jurídica del quejoso, pues se ignora cuál será el marco legal y constitucional en materia educativa que funcionará México.

* 1. Violación a la interdicción de la arbitrariedad.

Asimismo, el Memorándum reclamado viola en perjuicio de la quejosa y de la población en general la garantía de seguridad jurídica en su vertiente de interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso, **ya que se trata de una medida desequilibrada e irrazonable por parte de la autoridad responsable, que se basa en el capricho o abuso de que no ha sido posible alcanzar un acuerdo entre el Legislativo y los distintos sectores del gremio magisterial para derogar la reforma educativa y remplazarla y, por ende, el acto reclamado carece de sustento legal o constitucional alguno**.

La prohibición del exceso como un principio de la seguridad jurídica es una regla de equilibrio y, por lo tanto, si el objeto determinado por el Memorándum reclamado es que exista un marco legal “satisfactorio, útil y funcional” en materia educativa, se debe valorar las consecuencias que tiene respecto a los alumnos inscritos en las instituciones educativas de nuestro país que se deje sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la reforma educativa y que se reinstale a maestros que no acreditaron las evaluaciones, lo anterior con la única finalidad de que no estemos frente a una medida desequilibrada, arbitraria y caprichosa, que busque beneficiar únicamente a los maestros más no así a los alumnos y usuarios del sistema educativo nacional, quienes se insiste, deben tener prevalencia sobre todos.

Al respecto debe resaltarse que el Memorándum reclamado tiene como único objetivo la protección del gremio magisterial y no así de los usuarios del sistema educativo y/o del interés superior de los menores respecto a que se proteja y garantice su derecho humano a la educación, pues el acto reclamado sin sustento alguno textualmente señala que *“la mal llamada reforma educativa no se ha traducido en una mejoría de la calidad de la enseñanza; en cambio este conjunto de modificaciones legales, impuesto mediante actitudes autoritarias y recurriendo a campañas de descrédito en contra del magisterio nacional, ha causado una indeseable polarización en la sociedad, así como una manifiesta erosión institucional”,* lo cual acredita que el Memorándum reclamado de ninguna manera busca proteger y garantizar el derecho a la educación de los menores sino simplemente proteger derechos laborales y económicos de los maestros y que el mismo fue emitido por mero capricho o abuso del Poder Ejecutivo Federal .

Por lo tanto, la autoridad responsable al no haber realizado este ejercicio de ponderación y de equilibrio entre los derechos de los maestros y los alumnos, violó en perjuicio de los quejosos el derecho fundamental a la seguridad jurídica en su vertiente de interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso, motivo por el cual es a todas luces inconstitucional y se debe conceder a la quejosa el amparo y protección que por esta vía se solicita.

* 1. Violación al principio de confianza legítima.

De igual forma, el Memorándum reclamada es violatorio del principio de confianza legítima, mismo que es una manifestación del derecho a la seguridad jurídica, en su faceta de interdicción o prohibición de la arbitrariedad o del exceso.

Ello es así, pues mediante la reforma constitucional en materia educativa, y las reformas a la Ley General de Educación y la expedición de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Docente, es decir ,mediante la actuación del Poder Constituyente Permanente y el Legislativo Federal, se creó en los alumnos (como los Quejosos) y en general en los usuarios del sistema educativo confianza en que el sistema educativo funcionaría conforme a los parámetros establecidos en las normas programáticas constitucionales y sus leyes secundarias, además de que se garantiza que únicamente podrán impartir clases los maestros que acrediten las evaluaciones establecidas en el marco normativo.

No obstante lo anterior, de manera imprevisible e intempestiva y sin sustento legal o constitucional la autoridad responsable ordenó se dejen sin efecto todas las medidas que se hayan traducido en la aplicación de la llamada reforma educativa, lo cual deja en un estado de inseguridad jurídica absoluta a los quejosos y a los usuarios del sistema educativo nacional, pues se ignora cuál será el marco normativo que se aplicará en México, además de que se vulneró el principio de confianza legítima pues no existe estabilidad en cuanto a las normas, lineamientos y directivas con base en las cuales funcionará el sistema educativo, sino que se deja todo al arbitrio y capricho de la autoridad responsable, quien a través de otro Memorándum o de cualquier otro acto arbitrario podría pretender modificarlo.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto y toda vez que ha quedado acreditado que el Memorándum es inconstitucional, resulta válido y procedente que se conceda a la parte Quejosa el amparo y protección que de la Justicia de la Unión por esta vía se solicita.

1. **El Memorándum Reclamado es inconstitucional pues viola en perjuicio de la parte Quejosa el Derecho Fundamental a la Seguridad Jurídica, en relación con el principio de autoridad formal de las normas jurídicas establecido por los artículos 72 y 135 de la Constitución.**
2. **El Derecho Fundamental a la Seguridad Jurídica, en relación con el principio de autoridad formal de las normas generales.**

Resulta de explorado derecho que la premisa fundamental sobre la que versa el derecho humano de seguridad consiste en "saber a qué atenerse" respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad.

Asimismo, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido en diversos precedentes que el principio de legalidad y seguridad jurídica garantizados en su expresión genérica en los artículos 14 y 16 constitucionales, es respetado cuando las disposiciones de observancia general generan, por una parte certidumbre a los gobernados sobre las consecuencias jurídicas de sus conductas y, por otra, tratándose de las normas que confieran alguna facultad a una autoridad, como lo son las hoy responsables, acotan en la medida necesaria y razonable tal atribución, en forma tal **que se impida a dicha autoridad actuar de manera arbitraria o caprichosa en atención a las normas a las que debe sujetarse al ejercer dicha potestad.**

Íntimamente relacionado con el derecho fundamental a la seguridad jurídica se encuentra relacionado el principio de autoridad formal de las normas generales (constitucionales o legales), conforme al cual una norma general no puede derogada, modificada o aclarada más que por otra resolución proveniente de la autoridad emisora de la norma en la que se hayan seguido los mismos procedimientos establecidos para la expedición de la misma.

El principio de autoridad formal de las normas constitucionales encuentra su sustento en el artículo 135 de la Constitución mismo que establece en la parte que nos interesa, lo siguiente:

**Artículo 135.** La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.

Por su parte, el principio de autoridad formal de las leyes tiene fundamento en el artículo 72 de nuestra Constitución Federal, mismo que establece que *“En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.”* Así, dicho principio tiene como principal finalidad el respetar la seguridad jurídica de los gobernados en el sentido de que ninguna autoridad pueda de manera arbitraria modificar, reformar o derogar el contenido de una norma general sea de rango constitucional o legal, sino más que en aquellos casos en que se siga el mismo procedimiento establecido para su creación.

No obstante lo categórico del principio constitucional en comento, el mismo es vulnerado por la autoridad responsable, tal y como se acredita a continuación.

1. **Violación en el caso concreto.**

Es evidente que la autoridad responsable al ordenar en el Memorándum reclamado que no se han alcanzado los acuerdos entre el Legislativo y los distintos sectores del gremio magisterial para derogar la reforma educativa y remplazarla por un marco legal satisfactorio y por lo tanto instruir a todas las instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas a que deje sin efecto todas las medidas en las que se haya traducida la aplicación de la llamada reforma educativa, esta de facto derogando y/o modificando la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Docente, inobservando el principio de autoridad formal de la Ley establecido en el artículo 72 constitucional.

En efecto, la única manera de que una norma general como lo son la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Docente, pierdan su vigencia ya sea por su modificación o su abrogación, es a través del procedimiento de derogación o modificación establecido en el artículo 72 constitucional.

No obstante lo anterior, la autoridad responsable al ordenar en el acto reclamado que se deje sin efecto todas las medidas en que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa, está incluyendo desde luego las medidas legislativas, por lo que de facto y de iure está derogando y modificando las leyes en comento, a través del Memorándum reclamado, con lo cual está violando el artículo 72 constitucional.

Pero además, al ordenarse en el Memorándum reclamado que **TODAS** las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la reforma educativa se deben dejar sin efecto, incluye también y desde luego las medidas de reforma constitucional, pues como se mencionó con anterioridad la llamada reforma educativa tuvo su origen en Reforma Educativa, misma que entró en vigor el día siguiente de su publicación.

Luego entonces, el Memorándum reclamado es a todas luces inconstitucional al dejar sin efectos y aplicación los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, párrafo tercero, inciso d) párrafo segundo de la fracción II y la fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que se haya llevado a cabo el procedimiento de reforma constitucional establecido en el artículo 135 de nuestra Carta Magna.

En mérito de lo antes expuesto y, toda vez que ha quedado acreditado que el Memorándum reclamado es inconstitucional, resulta válido y procedente que se conceda a la Quejosa el Amparo y Protección que de la Justicia de la Unión por esta vía se solicita.

1. **El Memorándum Reclamado viola por su inobservancia lo dispuesto por el artículo 29 constitucional.**
2. **El artículo 29 constitucional.**

El artículo 29 constitucional establece lo que la doctrina denomina como “*suspensión de derechos humanos*”, anteriormente conocido como “*suspensión de garantías individuales*”. Al respecto, las expresiones suspensión de garantías, suspensión de derechos humanos, estado de excepción o de sitio, pretenden habitualmente indicar el régimen jurídico excepcional al cual una comunidad territorial es sometida temporalmente, en consideración a un estado de peligro para el orden público, por efecto de una previsión de la autoridad estatal que atribuye poderes extraordinarios a la autoridad pública y que sanciona correspondientes restricciones de las libertades de los ciudadanos.

En este sentido, el artículo 27 del Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos) contempla la figura de la “Suspensión de Garantías”, siendo importante señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva OC-8/87, ha estimado que “del análisis de los términos de la Convención en el contexto de estos, resulta que no se trata de una ‘suspensión de garantías’, en sentido absoluto, ni de la ‘suspensión de los derechos’, ya que siendo estos consustanciales con la persona lo único que podría suspender seria su pleno y efectivo ejercicio”.

En nuestro país, el artículo 1, primer párrafo, de la Constitución Federal, establece que:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio **no podrá restringirse ni suspenderse**, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Ahora bien, el artículo 29 de la Constitución Federal es el que establece los casos, los procedimientos y los derechos humanos que pueden ser objeto de suspensión. Para pronta referencia a continuación se transcribe el precepto constitucional en cita, mismo que es del tenor literal siguiente:

**Artículo 29.** En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

En los decretos que se expidan, **no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez**; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.

Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión.

Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.

Del precepto constitucional supracitado, en la parte que nos interesa, se desprenden tres elementos fundamentales que tienen que ser observados al emitir una declaración de restricción o suspensión de derechos humanos, a saber:

1. Solamente procede en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto;
2. Es una facultad que si bien es del Presidente, requiere sin excepción de la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido; y
3. Existen derechos humanos que en ningún caso, y bajo ninguna excepción, pueden ser suspendidos, **dentro de los cuales se encuentran los derechos de la niñez (y a su educación como veremos más adelante).**

Una vez expuesto lo anterior, a continuación se acreditará que el Memorándum que por esta vía se reclama, es contrario al artículo 29 constitucional, pues la autoridad responsable suspendió a través del mismo el derecho humano de los niños a recibir una educación de calidad.

1. **Violación en el caso concreto.**

Resulta de explorado derecho, que uno de los derechos humanos más importantes de la niñez, es el derecho a la educación. En este sentido, el artículo 57, primer párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que:

**Artículo 57**. Niñas, niños y adolescentes tienen **derecho a una educación de calidad** que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, **que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad**, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables.

Por su parte, el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, establece que: *“1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;”*

De los artículos supracitados, se desprende que el derecho de la niñez a la educación incluye el que la misma sea de calidad, es decir, que se desarrollen al máximo sus aptitudes y potencialidades y la capacidad mental y física del niño al máximo de sus posibilidades.

**Sígase de lo dicho, que el derecho a la educación de calidad al ser un derecho humano de la niñez es insuspendible de conformidad con el artículo 29 constitucional.**

No obstante lo anterior, a través del Memorándum que por esta vía se reclama, la autoridad responsable suspende el derecho a la educación de calidad de las niñas y los niños en nuestro país, lo cual, se insiste, se encuentra terminante y expresamente prohibido por el artículo 29 constitucional.

En efecto, en términos del inciso b) del Memorándum reclamado se establece que mientras el proceso de dialogo no culmine en un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en que se haya traducido la aplicación de la reforma educativa; mientras que el inciso c) del mismo establece la orden a la SEP de reinstalar a los educadores que fueron cesados por la aplicación de las evaluaciones punitivas.

Con lo anterior, la autoridad responsable está ordenando que se deje de aplicar la reforma constitucional en materia educativa y sus leyes secundarias y reglamentarias, lo que se traduce en que se suspendiendo el derecho de los niños y niñas a una educación de calidad, ya que inclusive se reinstalará a maestros que no aprobaron las evaluaciones que los certifican como educares de calidad de los niños.

**Esta situación es impermisible en nuestro Estado Constitucional de Derecho por mandato expreso del artículo 29 de la Ley Fundamental, y por lo tanto, trae como consecuencia que el Memorándum reclamado sea a todas luces inconstitucional.**

Además, y en el supuesto inadmitido que se considere que el derecho a la educación de calidad no es un derecho de la niñez y que, por tanto, el mismo si es suspendible, el Memorándum reclamado es inconstitucional, pues suspende el derecho a la educación de los niños sin haberse seguido el proceso establecido en el artículo 29 constitucional.

En mérito de lo anteriormente expuesto, y toda vez que ha quedado acreditado que el Memorándum reclamado es inconstitucional al suspender el derecho humano a la educación de la niñez, resulta válido y procedente que se conceda a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

1. **El Memorándum resulta ilegal y violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución, en relación con el artículo 92 constitucional y con el artículo 3 fracciones IV y VII de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.**

El artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en lo conducente establece lo siguiente:

**Artículo 3**. Son elementos y requisitos del acto administrativo:

[…]

IV. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición;

[…]

VII. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en esta Ley;

[…]

En efecto, con independencia de que ya ha quedado demostrado que el Memorándum reclamado viola los principios de legalidad consagrados en la Constitución por no haber sido emitido por una autoridad competente que tenga las facultades necesarias, así como por no estar debidamente fundado y motivado, también es preciso mencionar que dicho acto de autoridad es omiso en reunir los requisitos necesarios para que se considere válido y pueda ser obedecido.

Lo anterior es así, al considerar lo estipulado por el artículo 92 de la Constitución Federal, que a la letra dice:

**Artículo 92.** Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados por el Secretario de Estado a que el asunto corresponda, y **sin este requisito no serán obedecidos.**

Del artículo recién transcrito se puede observar que un requisito *sine qua non* para que las órdenes del Presidente sean obedecibles es que éstas se encuentren también firmadas por el Secretario de Estado a que el asunto corresponda y dado que en el caso que nos ocupa, el Memorándum reclamado solamente fue suscrito por el Presidente, es evidente que carece de dicho requisito y en consecuencia no puede ser obedecible.

En este sentido, es aplicable la siguiente tesis que a la letra dice:

**LEYES, REFRENDO DE.[[54]](#footnote-53)**

El artículo 92 de la Constitución ordena que todos los reglamentos, decretos y órdenes deberán estar firmados por el secretario del despacho, encargado del ramo a que el asunto corresponda y que sin este requisito no serán obedecidos, y dicho artículo no hace discriminación o diferenciación especial alguna, por lo que sin el requisito del refrendo no es obedecible una ley o decreto.

Luego entonces, es claro que, (i) al carecer el Presidente de facultades para emitir el acto de Autoridad que nos ocupa, (ii) al no encontrarse éste debidamente fundado y motivado, y (iii) al carecer de los requisitos necesarios para su validez, dicho documento se encuentra en contravención con la legislación vigente y su emisión representa una violación a la multicitada garantía constitucional de fundamentación en relación con lo establecido en el artículo 3, fracción V, dela Ley Federal de Procedimiento Administrativo, misma que es de aplicación obligatoria a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal.

En mérito de lo anteriormente expuesto, y toda vez que ha quedado acreditado que el Memorándum reclamado es inconstitucional, resulta válido y procedente que se conceda a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

1. **El Memorándum resulta ilegal y violatorio de la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución, en relación con el artículo 3(V) de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.**

Para una mejor comprensión de los preceptos legales y constitucionales violados, a continuación los citamos en lo conducente:

**Artículo 16.** Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."

**Artículo 3.** Son elementos y requisitos del acto administrativo:

[…]

V. Estar fundado y motivado;

[…]

El precepto constitucional previamente transcrito, impone como garantía a favor del gobernado, que todo acto de autoridad se funde y motive, a fin de que éste pueda conocer con precisión los motivos y razones legales que se tomaron en consideración para emitir el acto de Autoridad.

Igualmente, señala que debe ser emitido por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; debiendo entenderse por fundamentación la cita del precepto legal o bien el principio jurídico, cualquiera que sea su forma de expresión, que le sirva de apoyo.

Así las cosas, tenemos que de una lectura simple que se haga del Memorándum, se aprecia inequívocamente que en el texto del mismo no existe referencia a una sola norma legal en que encuentre fundamentación el acto de Autoridad que nos ocupa, por lo cual carece de uno de sus requisitos esenciales, como lo es, la debida fundamentación.

En este sentido, es aplicable la siguiente tesis jurisprudencial:

**COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.[[55]](#footnote-54)**

Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que **todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación**. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que estos se hallen en contradicción con la Ley Fundamental o la secundaria.

Robustece lo apenas señalado, y como se verá con mayor detalle en el tercer concepto de violación siguiente, lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció el criterio consistente en que para estimar cumplida la garantía de fundamentación prevista en el numeral 16 de la Constitución, en lo relativo a la fijación de la competencia de la Autoridad en el acto de molestia, es necesario que en el documento se invoquen con precisión todas las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorga las facultades a la Autoridad emisora y, en caso de que tales normas legales contengan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle el apartado, fracción o fracciones, incisos y subincisos en que se apoya su actuación, pues de lo contrario, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, lo que sin duda violentaría la garantía en comento, pues no es dable ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste en una exacta individualización del acto de autoridad de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado con relación a las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.

Tal criterio orientador se desprende del contenido de la jurisprudencia que se cita a continuación:

**COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.[[56]](#footnote-55)**

De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’, así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio.

Del citado criterio se desprende que para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia con base en la Ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso, y en el supuesto de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que corresponden a la Autoridad emisora del acto.

Lo anterior permite concluir que la emisión del acto de Autoridad que nos ocupa viola flagrantemente la garantía individual consagrada en el artículo 16 (dieciséis) de la Constitución.

1. **El Memorándum resulta ilegal y violatorio de la garantía de legalidad contenida en el 16 de la Constitución, en relación con el artículo 3(V) de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.**

Lo anterior es así, ya que, aunado a la falta de fundamentación que tiene el documento que nos ocupa, éste también carece de una debida motivación, pues no se señalan con precisión las circunstancias especiales y particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo importante señalar que no se puede considerar como una adecuada motivación las razones, sin sustento, que se plasman en el “Memorándum”; a saber lo contenido en el primer párrafo del referido documento, que a continuación se transcribe:

“Como es de público conocimiento, las reformas conocidas como estructurales y la agenda impuesta desde el extranjero durante el periodo neoliberal no han dejado más que pobreza, violencia, corrupción y malestar social. Particularmente, la mal llamada reducativa no se ha traducido en una mejoría de la calidad de la enseñanza; en cambio, este conjunto de modificaciones legales, impuesto mediante actitudes autoritarias y recurriendo a campañas de descrédito en contra del magisterio nacional, ha causado una indeseable polarización en la sociedad, así como una manifiesta erosión institucional.”

De la transcripción que antecede se observa que las razones ahí esgrimidas no configuran una adecuada motivación, ya que, al ser dichos razonamientos imprecisos y carentes de elementos que proporcionen un sustento para demostrar su veracidad, se tiene como consecuencia que los gobernados no tengan conocimiento de la esencia de los argumentos en que la Autoridad intentó motivar su actuar y por ende no estén en posibilidad de conocer las circunstancias precisas que se deben de impugnar, provocando así, un estado de indefensión.

Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que otro elemento para que se considere que existe una debida motivación es el hecho de que haya adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, situación que evidentemente no se actualiza en el caso que nos ocupa, pues como ya quedó expresado en el concepto de violación anterior, el “Memorándum” no cita una sola legislación o artículo en el cual funde la procedencia del acto.

En este sentido, es aplicable la tesis de jurisprudencia V.2o. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 54, junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, página 49, que dice:

**FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.**

De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que **ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso** y, por lo segundo, que también **deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto**; siendo necesario, además, que exista **adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables**, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

En términos de lo antes señalado, queda claro que para considerar que un acto de Autoridad cumple de manera cabal con el aspecto material del requisito de debida motivación, dentro del texto del señalado acto se deberán mencionar, de forma circunstanciada, las referencias fácticas, causas inmediatas o razones particulares que se tomaron en cuenta, así como el fundamento legal perfectamente aplicable al caso específico y que la Autoridad consideró para emitir el acto de que se trate.

De esta manera sólo si se cuenta con una correcta fundamentación y motivación se podrá dar plena validez al acto de Autoridad que constituye una molestia para el particular y sobre todo a este último se le dará una plena y total seguridad jurídica garantizándole a su vez la posibilidad, de interponer los medios de defensa adecuados.

1. **El Memorándum resulta ilegal y violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución, en relación con los artículos 49, 72 y 89 de la misma Carta Magna y el artículo 3(I) de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.**

En este sentido, para una mayor comprensión se realiza una transcripción de la parte conducente de los artículos 89 (ochenta y nueve) y 3 (tres) fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, considerando que los demás ya fueron previamente transcritos o se hará referencia de ellos más adelante en el presente concepto de violación.

**“Artículo 89.** Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:.

I.Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;

Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones entrarán en funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su encargo.

En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo Secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la República;

III.     Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica;

IV.     Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales;

V.      Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las leyes.

VI.     Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

VII.    Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la fracción IV del artículo 76.

VIII.   Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión.

IX.     Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo, en términos de lo dispuesto en el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución;

X.      Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI.     Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión Permanente.

XII.    Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones.

XIII.   Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su ubicación.

XIV.   Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común, en el Distrito Federal;

XV.    Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

XVI.   Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la República podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV y IX, con aprobación de la Comisión Permanente;

XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.

El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición.

XVIII. Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado;

XIX.   Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley;

XX.    Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

**“Artículo 3.** Son elementos y requisitos del acto administrativo:

I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo;

(…)

La violación constitucional se debe a que de la interpretación conjunta y armónica de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, se advierte que los actos administrativos precisan, para ser legales, entre otros requisitos, que sean emitidos por Autoridad competente cumpliéndose las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa **que todo acto de Autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado**, expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que la Autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues de lo contrario se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la Autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo.

En este sentido, las garantías de legalidad y seguridad jurídica tienen el alcance de exigir que todo acto de Autoridad, **deba emitirse por quien tenga facultad expresa para ello**, señalando en el propio acto, como formalidad esencial que le dé eficacia jurídica, el o los dispositivos que legitimen la competencia de quien lo emita y el carácter con que este último actúe, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la dependencia correspondiente o por delegación de facultades.

En este orden de ideas, aunado a que en el “Memorándum” no se emplea un solo artículo o legislación que fundamente el acto de Autoridad, tampoco existe normatividad que faculte al Presidente Andrés Manuel López Obrador para emitir un acto de esta índole, pues dentro de las facultades que expresamente le concede el artículo 89 (ochenta y nueve) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Presidente, no existe alguna que lo faculte para reformar o derogar la legislación vigente.

Lo anterior resulta cierto, pues de conformidad con el artículo 72 (setenta y dos) de nuestra Carta Magna, la facultad para reformar o derogar leyes o decretos corresponde únicamente al Congreso de la Unión y no al Presidente, ya que, se deben atender los mismos procedimientos establecidos para la formación normativa, tal y como se puede apreciar de la parte conducente del artículo mencionado, que a continuación se transcribe:

**Artículo 72.** Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:

[…]

F. En la interpretación, reforma o **derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación**.

[…]

En este orden de ideas, es evidente que no se puede dejar sin efectos o modificar una norma vigente sin la intervención del Congreso, ya que, resultaría contrario a Derecho suspender un acto del Legislativo a través de un acto del Ejecutivo pues no se estaría respetando el principio de división y separación de poderes consagrado en el artículo 49 (cuarenta y nueve) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala lo siguiente:

**Artículo 49.** El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Así las cosas, de la transcripción recién realizada del artículo 49 (cuarenta y nueve), se puede apreciar que el Poder de la Federación debe encontrarse dividido en un Poder Legislativo, uno Ejecutivo y uno Judicial y que no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona, por lo cual el titular del Ejecutivo no puede revestirse de las facultades que son competencia del Legislativo o del Judicial, ya que de lo contrario se estaría violentando lo previsto en el artículo constitucional apenas citado, razón por la cual se hace evidente lo ilegal y excesivo del acto de autoridad que nos ocupa, pues como ya se acreditó previamente (i) carece de fundamentación y motivación alguna, y (ii) el Presidente no goza de facultades para emitirlo.

Asimismo, no pasa desapercibido que si bien es cierto que existen criterios jurisprudenciales que señalan que la división de Poderes establecida en nuestra Carta Magna goza de cierta flexibilidad puesto que no constituye una separación absoluta y determinante, también lo es que dicha flexibilidad sólo significa que entre los Poderes de la Federación debe existir cierta colaboración y coordinación sin que ello se traduzca en que alguno de ellos pueda arrogarse facultades que le correspondan a otro, sino solamente aquellos que la propia Constitución les asigne; en este sentido, robustece lo anterior, la, que dice:

**DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA ARROGARSE FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLOS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES ASIGNA.**[[57]](#footnote-56)

El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en un solo individuo o corporación. Sin embargo, ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte que la división funcional de atribuciones que establece dicho numeral no opera de manera rígida, sino flexible, ya que el reparto de funciones encomendadas a cada uno de los poderes no constituye una separación absoluta y determinante, sino por el contrario, entre ellos se debe presentar una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado. Como se advierte, en nuestro país la división funcional de atribuciones no opera de manera tajante y rígida identificada con los órganos que las ejercen, sino que se estructura con la finalidad de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas, mediante un régimen de cooperación y coordinación que funcionan como medios de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público, garantizando así la unidad del Estado y asegurando el establecimiento y la preservación del estado de derecho. Por su parte, el artículo 133 de la Constitución Federal consagra el principio de supremacía, que impone su jerarquía normativa a la que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que, el hecho de que la división de poderes opere de manera flexible sólo significa que entre ellos existe una colaboración y coordinación en los términos establecidos, pero no los faculta para arrogarse facultades que corresponden a otro poder, sino solamente aquellos que la propia Constitución les asigna. De este modo, para que un órgano ejerza ciertas funciones es necesario que expresamente así lo disponga la Constitución Federal o que la función respectiva resulte estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas por efectos de la propia Constitución, así como que la función se ejerza en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva la facultad propia.

1. **El Memorándum resulta ilegal y violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución, en relación con los artículos 133 y 135 de la misma Carta Magna, así como el artículo 3 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.**

En este sentido, para una mejor referencia se transcriben, en lo que interesa, los artículos 133 y 135 de la Constitución Federal. En consideración a que los demás ya fueron previamente copiados, por lo que se solicita se tengan aquí por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones:

**Artículo 133.** Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

**Artículo** **135**. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Resulta entonces que a partir de una interpretación sistemática e integral de lo señalado en los Conceptos de Violación que anteceden y del artículo 133 (ciento treinta y tres) constitucional, el “Memorándum” deviene también violatorio del precepto que se cita, al ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, norma basal de todo el sistema jurídico, cuya supremacía textualizada según la descripción de la disposición en comento, ha sido incluso reiterada por nuestro Tribunal Supremo.

La violación se hace evidente al contener el Memorándum que se combate, la orden directa por parte del Presidente –*cargo con el que está rubricado el documento*–, a tres miembros de su gabinete de inobservar preceptos constitucionales, como se desprende de la simple lectura del primer párrafo de la segunda foja del documento aludido:

“Así pues, **en tanto se alcanza un entendimiento con maestros y padres de familia sobre los cambios constitucionales requeridos** y las leyes reglamentarias que deben ser modificadas o, en su caso, abrogadas, y **con base en las facultades que me confiere el cargo que detento**, me permito presentar a ustedes los siguientes lineamientos y directivas: …”[[58]](#footnote-57)

Lo anterior hace manifiesta la orden a desobedecer las normas que rigen la función legislativa, así como el procedimiento que debe observarse para llevar a cabo una adición o reforma constitucional.

Para entender lo anterior, hay que referirse primero al significado de “Lineamiento” que, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es: “*dirección, tendencia”*; y de “directivas” que al proceder de directriz significa: *“instrucción que ha de seguirse”*.

De manera entonces que la orden es clara: *en tanto se alcance un entendimiento* sobre los cambios que han de hacerse a la constitución, y a *las leyes reglamentarias* sus subordinados deberán actuar según lo prescribe el documento señalado, y que culmina al manifestar que ello deviene de: *“las facultades que me confiere el cargo que detento*” es decir, como Presidente, según la firma que aparece en el documento.

Así, el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 237 de la Constitución de Apatzingán (1814); en el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano (1822); en el artículo 27 del Acta Constitutiva y de Reformas (1824); en el artículo 161 fracción II, de la Constitución Federal de 1824, en el artículo 126 de la de 1857, que llega a nuestros días en el artículo 133 de la Constitución Federal, sencillamente es flagrantemente quebrantado.

Lo anterior es así, pues con el Memorándum se insta a tres miembros del gabinete no sólo a ceñirse a lo que en él se dispone, y que contraria la división que constituye el Supremo Poder de la Federación, como antes se estableció, sino que desacata la supremacía del texto constitucional que especifica los procedimientos que se requerirían para hacer válida la intención expresada en el documento de marras: modificar o reformar la constitución.

La Constitución, debe entenderse, es la norma primigenia sobre la que, como una *“República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación”* se estableció por voluntad del pueblo de México, según los principios que la misma contiene, según reza su artículo 40.

Es la norma constitucional la que delimita los ámbitos de validez de los diversos órdenes normativos que rigen al Estado mexicano, por lo que la afectación que conlleva el desconocimiento de las instituciones y normatividad fundamental de México es de interés de todos y cada uno de los ciudadanos mexicanos.

Ello es así pues el Estado se instaura a partir de la norma, de la ley que lo origina, la que además es de reconocimiento extraterritorial, y que hace al Estado Mexicano, lograr reunir los elementos constitutivos señalados en la “Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados” de 1933, mejor conocida como Convención de Montevideo de 33.

El Estado Mexicano no es un ente aislado, forma parte del concierto de las naciones, y su reconocimiento dentro del mismo se da al tener los requisitos *sine qua non* para ser identificado como tal: *Población permanente; Territorio determinado; Gobierno; y Capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados,* es decir,soberanía, siendo esta última comprendida como la facultad de autogobernarse, lo que sería imposible sin una reglamentación que, en nuestro caso, nace a partir de la ley cardinal de nuestro sistema jurídico: la Constitución Federal.

Tal es su supremacía que la cohesión que logra convertir en su origen, al Estado Mexicano en una Federación, es precisamente la Constitución, ya que regula de forma general a todas las entidades federativas que la componen, mediante un pacto federal, con el que se determina la trilogía del poder en México: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo que se desconoce con el Memorándum que con el presente se combate.

Lo anterior se ve fortalecido con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala:

**CONVENIOS INTERNACIONALES. SU CELEBRACIÓN ES FACULTAD DE LOS ÓRGANOS DE LA FEDERACIÓN, AUN CUANDO INVOLUCREN MATERIAS DE LA COMPETENCIA DE LOS ESTADOS**.[[59]](#footnote-58)

De los artículos 40, 41, 117, fracción I, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que el Estado Mexicano está conformado por un pacto federal, compuesto por Estados libres y soberanos sólo en lo concerniente a su régimen interior. Esto es, los Estados tienen autonomía o libertad para autodeterminar las reglas que les serán aplicables al interior, sin embargo, hacia el exterior están sometidos al Pacto Federal, por virtud del cual renuncian a parte de su potestad y del ejercicio de su autoridad, la cual transfieren a la Federación. Así, frente al exterior, el Estado Mexicano es un todo unitario. **En la cúspide del Estado Federal está la Constitución General de la República, que viene a ser la Norma Fundamental de toda la Unión**, ya que regula de forma general a todos los Estados miembros de la Federación, así como a los órganos federales y al Distrito Federal, sede de los poderes de la Unión. **Esta norma superior delimita los ámbitos de validez de los órdenes normativos internos** -local y federal-; sin embargo, esa delimitación sólo es aplicable al régimen interior del Estado Mexicano, mas no a la representación del Estado Mexicano hacia el exterior, donde actúa a través de los órganos federales en representación de toda la Unión, ya que a las entidades federativas les está prohibido expresamente por el artículo 117, fracción I, de la Constitución Federal, realizar alianzas, tratados o coaliciones con Estados extranjeros, esto es, los Estados miembros de la Federación no tienen una representación externa, sino sólo interna. Por tanto, la facultad de celebrar convenios internacionales debe ejercerse a través de los órganos de la Federación, aun cuando involucren una materia que es competencia de los Estados, pues de no considerarlo así, conllevaría a reconocer un vacío de autoridad frente a los Estados extranjeros y crearía una serie de problemas en el tráfico internacional y en las relaciones con los Estados extranjeros.

Ahora bien, la única discusión en términos de jerarquización normativa ha sido en materia de derechos humanos, respecto de la preeminencia que debiera concederse a las normas convencionales o a las constitucionales; pues en otros ámbitos ni siquiera ha lugar tal disertación.

Así, la discusión entre los señores Ministros de la Suprema Corte respecto de la jerarquización de la norma constitucional, ha sido diversa en materia de derechos fundamentales, variando los criterios para favorecer las normas constitucionales o convencionales, lo que dio como resultado, el conocido como principio *pro persona*, en el que se contiene, más allá de una mera jerarquización normativa -a partir de la reforma de 2011 al artículo 1°-, una operatividad normativa, en los términos descritos por el Ministro en Retiro José Ramón Cossío en su voto particular a la contradicción de Tesis 293/2011:

“… Hasta este momento la Constitución es jerárquicamente superior al tratado, sencillamente por prever sus requisitos de validez. Sin embargo, a partir de ahí el artículo 1° da lugar a una operación normativa completamente diferenciada, que nada tiene que ver ya con cuestiones de jerarquía. Como acabo de señalarlo en el párrafo anterior, la reforma de junio de dos mil once implicó que deben hacerse operaciones normativas a partir del principio pro persona tanto con los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que México es parte como con aquéllos reconocidos en la Constitución, sin establecer ninguna jerarquía entre ellos.”

Y así, después de arduos debates, el criterio de nuestro Tribunal Supremo ha ido evolucionando, por lo que se hace de especial interés advertir el contenido de la Jurisprudencia que se agrega y en la que el Pleno pondera la primacía indiscutible de la Constitución y que a la letra señala:

**DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL**.[[60]](#footnote-59)

El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, **se deberá estar a lo que indica la norma constitucional**, **ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano**, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. **En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano**.

Resulta palmario entonces, que el Memorándum supra referido, no puede, bajo ninguna circunstancia, tener fuerza reglamentaria para suplir la norma constitucional.

Lo manifestado se hace incontestable también a la luz de lo que la propia Constitución Federal establece en su artículo 135, como se refiere en la transcripción que del mismo antecede, ya que el proceso de reforma constitucional se da con un mecanismo a través del cual el “pueblo” como el principal elemento del Estado Mexicano, puede revisar el contenido normativo constitucional a través de sus legítimos representantes, es decir, del que se erige como uno de los tres Poderes Supremos de la Federación: el Poder Legislativo, mecanismo, dicho sea de paso, utilizado en 246 ocasiones desde su promulgación.

Al respecto es oportuno citar lo escrito por el Ministro Eduardo Tomás Medina Mora Icaza quien afirma:

“**Diversos teóricos han señalado que ciertos contenidos constitucionales constituyen una condición para la existencia de un Estado democrático** [[61]](#footnote-60). Una reforma constitucional no debe ser algo tan incongruente que, en lugar de reformar algún valor o institución, simple y sencillamente lo descarte…

Una reforma de la constitución no es simplemente un cambio de ciertas instituciones por otras, sino un ajuste de los valores constitucionales básicos a las circunstancias políticas y sociales o una incorporación al texto constitucional de una comprensión más amplia e inclusiva de dichos valores para remover alguna falla que haya sido identificada por la práctica constitucional”.[[62]](#footnote-61)

En este sentido, el Ministro Medina Mora refiere la necesidad de adecuación constitucional a partir de *una falla identificada por la práctica constitucional*, que pudiera concretar un ajuste para una comprensión más amplia e inclusiva de algún valor o institución, cuestión evidentemente ausente en el documento que con el presente se debate.

Ahora bien, si se anticipara en el caso que nos ocupa, el efecto buscado con la petición de amparo que con el presente se hace, es indudable que la restitución de la legalidad y seguridad jurídica quebrantadas con la orden emitida por el Ejecutivo Federal, resultaría en el fortalecimiento del Estado de Derecho que debe prevalecer en tanto sea vigente la norma constitucional que nos rige.

Lo contrario produciría infracciones de otros principios o normas constitucionales y/o legales, que redundarían no sólo en responsabilidad al Estado Mexicano en su conjunto, sino en el quebrantamiento del Estado de Derecho.

Así las cosas, la legitimación en la petición del amparo y protección de la justicia federal, resulta de la afectación que como ciudadano impondría a la parte Quejosa la vigencia del documento refutado.

**Suplencia de la queja.**

Finalmente, en atención a la naturaleza de los derechos fundamentales cuya violación se invoca, además de tratarse de una situación que genera una violación a los derechos y principios constitucionales de la población Mexicana en general, se solicita atentamente a su Señoría que supla la deficiencia de la queja en el presente asunto, en caso que advierta que de los actos reclamados se desprenda una violación de derechos humanos.

Lo anterior, es aplicable conforme a los principios sobre derechos humanos señalados en el cuerpo de la presente demanda de amparo y de acuerdo con la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra indica:

“**SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.**[[63]](#footnote-62)

De acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir del once de junio de dos mil once, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en aquélla y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, interpretando las normas relativas a esos derechos de conformidad con dichos ordenamientos (principio de interpretación conforme) favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia (principio pro homine). Lo anterior, acorde con los principios de interdependencia, indivisibilidad, universalidad y progresividad, de los cuales se advierte que los derechos humanos se interrelacionan y dependen recíprocamente unos de otros y tienen como origen común la dignidad humana, por lo cual no es procedente relegar algunos para conceder prioridad a otros ni puede existir jerarquía entre ellos, lo que significa que todos los derechos humanos deben ser objeto de protección sin distinción alguna. En atención a lo expuesto y de conformidad con el artículo 103 de la Carta Magna, a las autoridades jurisdiccionales que conozcan del amparo les corresponde con mayor énfasis, en razón de sus funciones de impartición de justicia y conforme al objeto del citado juicio, "proteger" y "garantizar" los derechos humanos en las controversias sometidas a su competencia. Por su parte, los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen que toda persona tiene derecho a un recurso "efectivo" ante los tribunales competentes, que la amparen contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y esos instrumentos normativos. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis P. LXVII/2011 (9a.), de rubro: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", que los Jueces están autorizados para realizar un control de convencionalidad "ex officio", esto es, con independencia de que las partes lo invoquen, pues dicha facultad no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones de los accionantes en cada caso concreto. En observancia de todo lo anterior, cuando el juzgador de amparo advierta que la norma general, acto u omisión reclamada de la autoridad responsable vulnera los derechos humanos del quejoso, debe abordar el estudio de esa violación, con independencia de que las partes invoquen o no dicha infracción en sus conceptos de violación o agravios, pues de esta manera se favorece el acatamiento de los principios señalados y se resguarda el efecto útil del juicio de amparo como medio para proteger y garantizar los derechos fundamentales, sin soslayar, desde luego, los presupuestos necesarios para suplir la deficiencia de argumentos, tales como que el juzgador tenga competencia, que el juicio sea procedente y que se respete la litis planteada. Esta suplencia complementa la prevista en la Ley de Amparo, ya que revela mayores alcances en cuanto al sujeto, al proceder en favor de cualquier persona y no sólo en beneficio de determinados individuos, circunstancia que, sin embargo, no torna inoperante el beneficio regulado en dicha ley, pues éste reviste una protección más amplia en cuanto al objeto, debido a que no se limita a violaciones de derechos humanos en materia de constitucionalidad y convencionalidad, sino también de legalidad. Lo anterior deja entrever que si bien ambas clases de suplencia pueden concurrir en ciertos casos, en otros puede resultar procedente una u otra, de manera que la contemplada en la Ley de Amparo sigue teniendo plena eficacia en los supuestos que prevé.

El anterior criterio establece medularmente que tratándose de violaciones a derechos humanos consagrados por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, en cumplimiento de su deber de llevar a cabo un control difuso de los derechos humanos, es procedente la suplencia de la queja por parte de su Señoría en caso de detectar una violación flagrante a cualquier derecho humano como acontece en el caso en particular.

**Pruebas.**

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo y sin perjuicio de ofrecer a su Señoría elementos adicionales de convicción en el momento procesal oportuno.

Adicionalmente, se solicita a su Señoría que previo cotejo realizado a las copias simples que se exhiben de los documentos originales y/o copias certificadas que se ofrecen como pruebas en la presente demanda, realice la certificación correspondiente para efectos de que se tengan exhibidos con el carácter de públicos en los respectivos cuadernos que se ordene abrir para dar trámite al incidente de suspensión del acto en los términos precisados en el presente escrito

Bajo este contexto, la parte Quejosa ofrece como pruebas las siguientes:

* + - 1. Las **pruebas documentales**, consistentes enlas constancias mediante las cuales se acredita que los Quejosos son estudiantes y forman parte del Sistema Educativo Nacional, según se acredita con el **Anexo “A”** de la presente demanda de amparo.
      2. La **prueba documental** consistente en copia simple del Memorándum Reclamado, mismo que se exhibe como **Anexo “B”** de la presente demanda de amparo indirecto.
      3. La **inspección judicial** sobre las siguientes páginas de internet:
         1. [https://twitter.com/lopezobrador\_/status/1118180463657521152](https://twitter.com/lopezobrador_/status/1118180463657521152%20https:/lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/04/Memora%CC%81ndum-16-abril-2019-Segob-SEP-SHCP.pdf)
         2. <https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/04/Memora%CC%81ndum-16-abril-2019-Segob-SEP-SHCP.pdf>
      4. La **prueba presuncional**,en su doble aspecto legal y humana en todo lo que beneficie a esta parte Quejosa.
      5. La **prueba instrumental de actuaciones**,en todo lo que beneficie a los intereses de los Quejosos.

Las pruebas referidas se relacionan con todos y cada uno de los hechos narrados en la presente demanda, los actos reclamados a las autoridades responsables así como con los conceptos de violación hechos valer. Las razones por las que los Quejosos las ofrecen como prueba es que de ellas se desprenderá la veracidad de todas y cada una de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo y necesariamente conllevarán a su Señoría a conceder a la parte Quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal en los términos y para el efecto solicitado.

Asimismo, esta parte Quejosa se reserva expresamente el derecho a ofrecer pruebas adicionales en la audiencia constitucional.

**Datos personales.**

Finalmente, por así convenir a los intereses de esta parte Quejosa, con base en los artículos 1, 2, 6, 7 y 47 de la Ley General de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados, los Quejosos **se oponen expresamente** a la publicación de sus datos personales tanto en las listas de acuerdos que se publiquen en este Juzgado de Distrito como en la sentencia definitiva que en su momento se dicte, esto, en términos de los artículos 6 y 8 del Reglamento del Consejo de la Judicatura Federal a dicha ley.

En consecuencia, los documentos, constancias y resoluciones relacionadas con la presente demanda de amparo indirecto, deberán considerarse como **información reservada**, de conformidad con lo previsto por el artículo 24(VI) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que se solicita a Usted para todos los efectos legales a los que haya lugar.

**Petitorios.**

Por lo expuesto y fundado, a Usted, Juez de Distrito en Materia Administrativa en turno, atentamente pedimos se sirva:

Por lo expuesto y fundado, a Usted, Juez de Distrito en turno, atentamente pedimos se sirva:

1. Tenerme por presentado, en los términos del presente escrito demandando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y de las autoridades que han quedado debidamente precisados.
2. Autorizar la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones por dicha vía.
3. Admitir a trámite la presente demanda de amparo y expedir a costa de la Quejosa una copia certificada del acuerdo de admisión correspondiente.
4. Tener por ofrecidas y exhibidas las pruebas que se detallan en el presente escrito de demanda, sin perjuicio de adicionar otras con anterioridad a la celebración de la audiencia incidental.
5. Tener por manifestada la oposición de la parte Quejosa para la publicación de sus datos personales.

1. Previos los trámites de ley, conceder a la parte Quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita.

**PROTESTO LO NECESARIO**

Ciudad de México, a la fecha de su presentación

En representación de: Nombre Completo del Quejoso

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nombre Completo del Representante**

1. Disponible en línea: <http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5419446&fecha=09/12/2015> [↑](#footnote-ref-0)
2. *Ídem*. [↑](#footnote-ref-1)
3. Conforme lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución y como titular de la Administración Pública Federal. [↑](#footnote-ref-2)
4. *Infra*, 7.5 (“*El Memorándum*”). [↑](#footnote-ref-3)
5. *Infra*, 7.5 (“*El Memorándum*”). [↑](#footnote-ref-4)
6. Disponible en línea: <https://www.gob.mx/sep/articulos/conoce-el-sistema-educativo-nacional> [↑](#footnote-ref-5)
7. *Ídem*. [↑](#footnote-ref-6)
8. *Infra*, “INTERÉS LEGÍTIMO”. [↑](#footnote-ref-7)
9. Disponible en línea: <https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288919&fecha=26/02/2013> [↑](#footnote-ref-8)
10. Véase más en: <https://www.cjf.gob.mx/documentos/notasInformativas/docsNotasInformativas/2013/notaInformativa15.pdf> [↑](#footnote-ref-9)
11. Disponible en línea: <http://morenabc.org/wp-content/uploads/2017/11/Plan-de-Nacion-de-Morena.pdf> [↑](#footnote-ref-10)
12. *Ídem*, pp. 385-387. [↑](#footnote-ref-11)
13. Disponible en línea: <https://www.gob.mx/presidencia/prensa/jefe-del-ejecutivo-firma-iniciativa-de-reforma-constitucional-en-materia-educativa> [↑](#footnote-ref-12)
14. La versión estenográfica de la conferencia de prensa del 12 de diciembre de 2018 se encuentra disponible en línea: <https://lopezobrador.org.mx/2018/12/12/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-del-presidente-de-mexico-andres-manuel-lopez-obrador/> [↑](#footnote-ref-13)
15. *Ídem*. [↑](#footnote-ref-14)
16. *Ídem*. [↑](#footnote-ref-15)
17. *Ídem*. [↑](#footnote-ref-16)
18. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pp. 42-43. Disponible en línea: <https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf> [↑](#footnote-ref-17)
19. Disponible en línea: <https://twitter.com/lopezobrador_/status/1118180463657521152> [↑](#footnote-ref-18)
20. Destacamos que el titular del domino de dicho sitio web es el Presidente, en lo particular y no la administración pública que cuenta con el dominio <https://www.gob.mx/>. De hecho, en el portal gob.mx no se publicó el contenido íntegro del Memorándum Reclamado, sino que se incluyó un hipervínculo al sitio personal del Presidente antes referido. [↑](#footnote-ref-19)
21. Disponible en línea: <https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/04/Memora%CC%81ndum-16-abril-2019-Segob-SEP-SHCP.pdf> [↑](#footnote-ref-20)
22. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, […] [↑](#footnote-ref-21)
23. *Supra*, 7.5 (“*El Memorándum*”). [↑](#footnote-ref-22)
24. *Supra*, 5 (“*Fecha de notificación de los Actos Reclamados*”) [↑](#footnote-ref-23)
25. Destacamos que además de los fines de semana respectivos, los días 17, 18 y 19 de abril de 2019 fueron inhábiles en términos de la circular 25/2019 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Además, el día 1 de mayo de 2019 es inhábil en términos de la Ley de Amparo. Disponible en línea: <https://www.cjf.gob.mx/transparencia/paginas/diasInhabiles.htm> [↑](#footnote-ref-24)
26. Voto particular del Ministro José Ramón Cossío Díaz en relación con el amparo en revisión 216/2014. [↑](#footnote-ref-25)
27. Décima Época. Registro: 2012364. Instancia: **Primera Sala**. Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 38/2016 (10a.). Página: 690. [↑](#footnote-ref-26)
28. Voto particular del Ministro José Ramón Cossío Díaz en relación con el amparo en revisión 216/2014. [↑](#footnote-ref-27)
29. *Cfr*. María del Pilar Hernández Martínez, “Mecanismos de Tutela de los Intereses Difusos y Colectivos”, UNAM, México, 1997, página 52. [↑](#footnote-ref-28)
30. *Ibídem*. Páginas 62 y 63. [↑](#footnote-ref-29)
31. Cfr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor, “Juicio de amparo e interés legítimo: la tutela de los derechos difusos y colectivos”, Breviarios Jurídicos, Porrúa, México, página 20. [↑](#footnote-ref-30)
32. Alexy, Robert, *Teoría de los derechos fundamentales*, trad. y estudio introductorio de Carlos Bernal Pulido, 2ª ed., Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, pp. 52 y 55. [↑](#footnote-ref-31)
33. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Loayza Tamayo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 147. [↑](#footnote-ref-32)
34. *Ídem*. [↑](#footnote-ref-33)
35. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Loayza Tamayo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 147. [↑](#footnote-ref-34)
36. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88. Párr. 60. Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Loayza Tamayo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 149. [↑](#footnote-ref-35)
37. Décima Época. Registro: 160584. Instancia: **Pleno** Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: P. LXVI/2011 (9a.).Página: 550. [↑](#footnote-ref-36)
38. Novena Época. Registro: 165822. Instancia: **Pleno**. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009. Materia(s): Civil, Constitucional. Tesis: P. LXVI/2009. Página: 7. [↑](#footnote-ref-37)
39. Como mencionamos anteriormente, los Quejosos son parte integrante del Sistema Educativo Nacional en términos del artículo 10(I) de la Ley General de Educación. *Supra*, 7.1 “*Quién es la parte Quejosa*”. [↑](#footnote-ref-38)
40. El interés colectivo en su sentido amplio (*lato sensu*) agrupa tanto al interés colectivo (*stricto sensu*) como al interés difuso. [↑](#footnote-ref-39)
41. *Supra*, 7.1 “*Quién es la parte Quejosa*”. [↑](#footnote-ref-40)
42. Véase, adicionalmente, el artículo 44 de la Constitución Federal. [↑](#footnote-ref-41)
43. *Supra*, 7.5 “El Memorándum”. [↑](#footnote-ref-42)
44. Visible en Jurisprudencia a 1990 comparada a la 1917-1985, Libro Segundo, Primera y Segunda Salas. Suprema Corte con Tesis relacionadas.- Mayo Ediciones.- páginas 636 y 637. [↑](#footnote-ref-43)
45. Jurisprudencia VI.2°.J/248, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 64, Abril de 1993, Octava Época, página 43 [↑](#footnote-ref-44)
46. Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Enero de 2007, Tesis: I.6o.C. J/52, Página: 2127, No. Registro: 173565. [↑](#footnote-ref-45)
47. *Supra*, 7.5 “El Memorándum”. [↑](#footnote-ref-46)
48. Cfr. La jurisprudencia cuyo rubro y datos de localización son los siguientes: **COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.”** Visible en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 77, Mayo de 1994, Página: 12. Tesis: P./J. 10/94, Apéndice 1917-1995, Tomo IV, Primera Parte, Materia Común, tesis 165, página 111. Registro No. 205463. Octava Época. [↑](#footnote-ref-47)
49. Tesis de jurisprudencia P./J. 78/2009, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXX, julio de dos mil nueve, Novena Época, página 1540. [↑](#footnote-ref-48)
50. Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIV, Septiembre de 2001, página: 714. [↑](#footnote-ref-49)
51. Décima Época, No. Registro: 2005552, Instancia: Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero 2014, Tomo II, Página 1513. [↑](#footnote-ref-50)
52. *Vid.* la ejecutoria relativa al amparo directo en revisión 84/2013 resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de 6 de marzo de 2013. [↑](#footnote-ref-51)
53. [TA]; 10a. Época; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 40, marzo de 2017; Tomo II; Pág. 1385. **2a. XXXVII/2017 (10a.).** [↑](#footnote-ref-52)
54. Tesis, sustentada por la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCV, Quinta Época, página 903 [↑](#footnote-ref-53)
55. Tesis de jurisprudencia P./J. 10/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, página 12 [↑](#footnote-ref-54)
56. Contradicción de tesis 2a./J. 115/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en el Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310 [↑](#footnote-ref-55)
57. Tesis de jurisprudencia P./J. 78/2009, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXX, julio de dos mil nueve, Novena Época, página 1540 [↑](#footnote-ref-56)
58. *Supra*, 7.5 “*El Memorándum*”. [↑](#footnote-ref-57)
59. Tesis: 1a. XV/2014 (10a.), Época: Décima. Registro: 2005449. Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I. Página: 640 [↑](#footnote-ref-58)
60. Tesis: P./J. 20/2014 (10a.), Época: Décima. Registro: 2006224. Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I. Página 202. [↑](#footnote-ref-59)
61. Amar, Akhil R. “Philadelphia Revisited: Amending the Constitution Outside Article V”, Chicago Law Review, 55 (4), 1988, págs.1043-1045, citado por Medina Mora Icaza, Eduardo Tomás, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada, Tomo III, José Ramón Cossío, Coordinador, Tirant Lo Blanch, México 2017, p. 2278. [↑](#footnote-ref-60)
62. Rawls, John, Political Liberalism, New York: Columbia University Press, 1993, pp. 238-239. [↑](#footnote-ref-61)
63. [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013; Tomo 3; Pág. 1830. **XXVII.1o.(VIII Región) J/3 (10a.).** [↑](#footnote-ref-62)